

HONORABLE MAGISTRADO
JUAN CARLOS GARZÓN MARTINEZ
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION “A”

RADICADO: 2500023360002022004370

MEDIO DE
CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

DEMANDANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE –IDRD

DEMANDADOS: UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO
ASEMAIN, con Nit. 901.118.265-1, integrada por INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS, con Nit.900.803.956-
7, con el 24%, ASECAF SAS, con Nit.808.000.935-2 con el 25% y
CONSTRUCCIONES MAJA SAS, Nit. 800.112.612-0 con el 51%

CONSORCIO SB, INTEGRADO POR: CIVING INGENIEROS
CONTRATISTAS SAS, NIT. 860.451.253-1 CON EL 60%, VALLEJO
H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS, NIT.
900.416.314-9 CON EL 40%

ASUNTO: SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA.

1

GERMAN ALFONSO ORJUELA JARAMILLO, en calidad de apoderado judicial de **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD**, de conformidad al poder otorgado por el doctor, **NELSON ANDRÉS MEJIA NARVAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.957.306 de Bogotá, obrando en calidad de jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - **IDRD**, Establecimiento Público del Orden Distrital, nombrado mediante Resolución No. 689 del 7 de septiembre de 2021, posesionado según Acta No. 3907 del 8 de septiembre del mismo año, en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución No.735 del 21 de noviembre de 2012 proferida por la Dirección General de la entidad, por medio de la cual se delegó la representación judicial y extrajudicial del IDR, cuyas fotocopias se anexan, teniendo en cuenta los artículos 1(1), 2 (2) y 5 (3) del Decreto 089 de 2021 ***Por medio del cual se establecen***

1 Artículo 1.- Representación legal en lo judicial y extrajudicial de las entidades del nivel central. Delegase en los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos y Gerente de la Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, la representación legal en lo judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital, en relación con sus respectivas entidades, para todos aquellos procesos, acciones de tutela, diligencias, acuerdos distritales y/o actuaciones judiciales o administrativas, que se adelanten con ocasión de los actos, hechos, omisiones u operaciones que realicen, en que participen o incurran, que se relacionen con asuntos inherentes a cada uno de ellos, conforme a su objeto, misionalidad y funciones; con las facultades previstas en el artículo 2 de este decreto. Los órganos de control del orden distrital ejercerán su representación legal en lo judicial y extrajudicial de conformidad con lo previsto en los artículos 5, 104 y 105 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 159 del CPACA. (...)

2 Artículo 2°.- Representación judicial y extrajudicial del sector descentralizado de la administración Distrital. Las entidades del sector descentralizado conforme su naturaleza, se representan a sí mismas en lo judicial y extrajudicial a través de sus representantes legales y conforme los actos de delegación internos. En armonía con las disposiciones y orientaciones contenidas en este Decreto se deberá garantizar la coordinación estratégica de la gestión judicial y extrajudicial con el sector central de la administración.

333 Artículo 5°.- Facultades inherentes a la representación judicial y extrajudicial. La representación judicial y extrajudicial que mediante el presente Decreto se delega, comprende las siguientes facultades:

lineamientos para el ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de Bogotá D.C., y se efectúan unas delegaciones. “Dentro del término otorgado y dando cumplimiento a lo ordenado en Auto del 24 de julio de 2023 se subsana la demanda en los siguientes términos:

DE LA SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA

Teniendo en cuenta las órdenes impartidas por el Despacho mediante auto del 24 de julio de 2023 en el numeral 1. “DE LA NECESIDAD QUE SE UNIFIQUE LA DEMANDA”⁴ respetuosamente su señoría en el presente escrito, se integran todas las manifestaciones y requerimientos que se pretendan en contra de las demandas para el análisis correspondiente del Despacho.

I. DESIGNACIÓN DE PARTES

Parte Demandante:

Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, CON Nit. 860.061.099-1, con domicilio en Bogotá D.C, ubicado en la Calle 63 No. 59 A-06, representado legalmente, por la Ingeniera BLANCA INES DURAN HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.987.429, en calidad de Directora General del IDRD, nombrada mediante Decreto Distrital No. 003 del 7 de enero de 2020 y posesionada mediante Acta No. 041 de la misma fecha, los cuales se anexan con esta demanda.

La Representación Legal y Judicial fue delegada al doctor, **NELSON ANDRÉS MEJIA NARVAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.957.306 de Bogotá, obrando en calidad de jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, Establecimiento Público del Orden Distrital, nombrado mediante Resolución No. 689 del 7 de septiembre de 2021, posesionado según Acta No. 3907 del 8 de septiembre del mismo año, en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución No.735 del 21 de noviembre de 2012 proferida por la Dirección General de la entidad, por medio de la cual se delegó la representación judicial y extrajudicial del IDRD, los cuales se anexa a esta demanda.

5.1. Actuar, transigir, conciliar judicial y extrajudicialmente, desistir, interponer recursos, participar en la práctica de los medios de prueba o contradicción y en general todo lo relacionado con las actuaciones a que hubiere lugar para el cumplimiento del mandato y la defensa de los intereses de la entidad, en nombre de Bogotá, Distrito Capital.

5.2. Atender, en nombre de Bogotá, Distrito Capital, los requerimientos judiciales o de autoridad administrativa, relacionados con las funciones inherentes a la respectiva entidad.

5.3. Constituir apoderados generales y especiales con las facultades de ley, para la atención de los procesos, diligencias y/o actuaciones, judiciales, extrajudiciales o administrativas de su competencia, conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

El poder deberá ajustarse a los parámetros de identidad corporativa fijados en el artículo 22 de este Decreto.

5.4. Iniciar las acciones judiciales y actuaciones administrativas que fueren procedentes para la defensa de los intereses de Bogotá, Distrito Capital. Esta facultad podrá ejercerse respecto de los actos que la entidad haya proferido, o respecto de asuntos asignados, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría Jurídica Distrital para iniciar o intervenir en nombre y en defensa de los intereses de Bogotá, Distrito Capital, en las acciones judiciales contra leyes, decretos y/o actos de autoridades administrativas del orden nacional.

5.5. Atender directamente las solicitudes de informes juramentados, conforme al artículo 217 del CPACA, 195 del CGP y demás normas procesales concordantes, o aquellas que las sustituyan.

5.6. Adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las providencias judiciales y decisiones extrajudiciales y administrativas, en las cuales resulte condenada u obligada directamente la respectiva entidad, de conformidad con las disposiciones especiales fijadas por el/la Alcaldesa mayor.

4 Con fundamento en las anteriores consideraciones, concluye el Despacho que se hace necesario que los ajustes o modificaciones efectuadas a las pretensiones, hechos y cuantía se integren con la demanda, de manera tal que queden consignados en un único documento, frente al cual el Despacho pueda efectuar el correspondiente análisis de procedibilidad.

Partes Demandadas:

- **UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN**, con Nit. 901.118.265-1, integrada por INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS, con Nit.900.803.956-7, con el 24%, ASECAF SAS, con Nit.808.000.935-2 con el 25% y CONSTRUCCIONES MAJA SAS, Nit.800.112.612-0 con el 51%, representada Legalmente por NATHALIA VEGA DURAN, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.798.849, integrada por integrada por INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS, con Nit.900.803.956-7, con el 24%, ASECAF SAS, con Nit.808.000.935-2 con el 25% y CONSTRUCCIONES MAJA SAS, Nit.800.112.612-0 con el 51%.
- **CONSORCIO SB, INTEGRADO POR: CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS**, NIT. 860.451.253-1 CON EL 60%, VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS, NIT. 900.416.314-9 CON EL 40%.

II. AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, es un establecimiento público descentralizado del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, sujeto a las normas de derecho público, creado mediante el Acuerdo 4 del Concejo del Distrito Especial de Bogotá en 1978, cuya máxima autoridad administrativa la constituye la Junta Directiva

Motivo por el cual de conformidad con el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 2080 de 2021, así como el artículo 613 de la Ley 1564 de 2012, no agotará requisito de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público.

3

III ANTECEDENTES CONTRACTUALES

3.1. ANTECEDENTES PROCESO DE SELECCIÓN, ADJUDICACION Y MODIFICACIONES AL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA UNION TEMORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAI E IDRD.

Hecho Primero. - El 30 de mayo de 2017 el IDRD publicó en el SECOP Aviso de Licitación con base en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual contenía la modalidad de selección, plazo de ejecución del contrato, presupuesto oficial (\$12.000.000.000), fecha, lugar y forma de presentación de la Oferta, y Cronograma de la Licitación Pública que se pretendía contratar.

Hecho Segundo.- Mediante Resolución 527 del 21 de julio de 2017, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, ordenó la apertura del proceso licitatorio IDRD-STC-017-2017, cuyo objeto era: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR – 12-091 CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS".

Hecho Tercero. - El 11 de agosto de 2017, se publicó el acta de cierre, en la cual se

procedió a verificar las 11 ofertas presentadas, entre ellas la presentada por la Unión Temporal San Antonio IDR Reforzamiento ASEMAIN, representada en por la señora, Natalia Vega Durán.

Hecho Cuarto. - Como consecuencia de lo anterior mediante resolución 706 del 22 de septiembre de 2017, el Subdirector Técnico de Construcciones, Mauricio Reina Manosalva, para el momento de la adjudicación, resolvió:

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Adjudicar el proceso de Licitación Pública IDR-STC-LP-017-2017, cuyo objeto es: **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS."** al proponente UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN, integrado por INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS identificada con NIT. 900.803.956-7, con el 24%, ASECAF SAS identificada con NIT. 808.000.935-2, con el 25% y CONSTRUCCIONES MAJA SAS identificada con NIT. 800.112.612-0, con el 51%; representada legalmente por NATHALIA VEGA DURAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.798.849, por el valor de **ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$11.816.242.707)**. Éste valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del presente proceso selectivo y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar y de conformidad con los precios unitarios ofertados.

Hecho Quinto. - Como consecuencia de lo anterior se suscribió el contrato 2937 de 2017, entre la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN, con Nit. 901.118.265-1, integrada por INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS, con Nit.900.803.956-7, con el 24%, ASECAF SAS, con Nit.808.000.935-2 con el 25% y CONSTRUCCIONES MAJA SAS, Nit.800.112.612-0 con el 51%, y MAURICIO REINA MANOSALVA, actuando como Subdirector de Construcciones, ordenador del gasto – Resolución 310 de 2018. La representante legal de la UNION TEMORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN, Nit. 901.18.265-1, era la señora NATHALIA VEGA DURAN, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.798.849, de la UNION TEMORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN.

Hecho Sexto. - El objeto del contrato fue "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR – 12-091 CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS".

Hecho Séptimo.- Previa a la firma del acta de inicio la Unión Temporal San Antonio IDR Reforzamiento ASEMAIN, presentó las siguientes garantías:

- Garantía única de cumplimiento No.AA027962, que amparó el contrato 2937-2017, la cual fue expedida el día 7 de diciembre de 2017, y aprobada el 20 de diciembre de 2017, con la que se garantizó el Buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento del contrato del valor del contrato con vigencia a liquidación del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral del valor del contrato en vigencia del contrato y tres años más, estabilidad y calidad de la obras del valor del contrato y la cláusula penal a partir del recibo final a satisfacción.

- Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, No. AA027966, expedida el 7 de diciembre de 2017 y aprobada el 20 de diciembre de 2017, la cual ampara; vigencia igual al plazo del contrato, cubre: predios, labores y operaciones, gastos médicos inmediatos, responsabilidad patronal y de contratistas.

Las pólizas fueron expedidas por La Equidad Seguros, Nit. 860.028.415, aprobadas el 20 de diciembre de 2017 mediante radicado IDRD 20178000609833.

Hecho Octavo.- El Acta de inicio se suscribió el día 16 de noviembre de 2017 entre Martha Vega Duran, en calidad de representante Legal de la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento ASEMAI y el Ingeniero, Fiaban Andrés Vallejo Sánchez, supervisor de la Interventoría.

Hecho Noveno. - En el contrato 2937 de 2017, se pactó un plazo de ejecución de trece (13) meses contados a partir de la firma del acta de Inicio, el cual comprendía los siguientes plazos: 1. Duración etapa de coordinación; quince (15) días, Duración etapa de trámites; dos (2) meses y quince (15) días y Duración etapa de obra, Diez (10) meses.

Hecho Décimo. - En el contrato 2937 de 2017, se acordó un valor inicial de ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (\$11.816.242. 707.00) y un anticipo del 50% sobre el costo directo del contrato de (\$9.194.414. 790.00), es decir la suma de CUTRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$4.577.216. 641.00).

3.1.2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 2937-2017 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE INTERVENTORÍA PRESENTADO POR EL CONSORCIO SANTA PAULA 008 JUNIO 2020.

Hecho Décimo Primero. - Durante la ejecución del contrato 2937 de 2017, se realizaron las siguientes modificaciones y prórrogas:

- Modificación No. 1, Prorroga No. 1, la cual se suscribió el 9 de julio de 2018, en el cual se estableció prorrogar el plazo de ejecución durante el término de un (1) mes, contados a partir del 10 de julio de 2018 hasta el 9 de agosto de 2018, por lo que la cláusula de Ejecución quedo de la siguiente manera: El Plazo de Ejecución, se estima en catorce (14) meses, discriminados así: quince (15) días, periodo de trámite de licencias: tres y medio (3.5) meses, periodo de construcción: Diez (10) meses. En esta prórroga el contratista contaba con veinte (20) días calendario, contados a partir del inicio de la modificación, para realizar el ajuste de los diseños estructurales y arquitectónicos cumpliendo con la valoración patrimonial.
- Modificación No. 2, la cual fue suscrita el 12 de marzo de 2019, para Aclarar el contrato en el sentido de precisar que las actividades de obra pública desarrolladas en el ejercicio del contrato 2937 de 2017 están excluidos de IVA, por lo que la utilidad como componente del AIU, se reduciría de 3.5% al 2.94117%, por lo que se aclara que la administración, imprevistos y utilidades (AIU), sería del 27.9411% sobre costo directo de obra.
- Modificación No. 3, Prorroga No. 2, la cual se suscribió el 1 de noviembre de 2019, en

la cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato 2937 de 2017, por un término de tres (3) meses más a partir de su vencimiento decir, desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 4 de febrero de 2020, estas prórrogas no implicaban costos adicionales para el IDR ni sobre costos para el contratista.

Hecho Décimo Segundo. - A su vez el contrato 2937-2017, tuvo varias suspensiones durante el plazo de ejecución del contrato así:

a). Acta de suspensión No. 1, plazo de 30 días, comprendido desde el 12 de febrero de 2018 hasta el 13 de marzo de 2018, por lo que el nuevo plazo de terminación del contrato se fijó el 14 de enero de 2019, la anterior suspensión para que la curaduría urbana y el IDPC (Instituto de Patrimonio Cultural) y el DADEP, para la revisión y la aprobación de la licencia de construcción y otros aspectos administrativos.

b) Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1, se estableció un plazo de sesenta (60) días, del 14 de marzo de 2018 hasta el 12 de mayo de 2018, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato, el 15 de marzo de 2019, el plazo se prolonga en razón a que no se otorgó el aval por parte del IDPC para continuar el proceso.

c) Ampliación No. 2 a la suspensión No. 1, por treinta (30) días más, comprendidos dentro del periodo del 13 de mayo de 2018 hasta el 11 de junio de 2018, por lo que la fecha de terminación de la obra nuevamente cambia al 14 de abril de 2019. En razón a que se continuaba a la espera de la respuesta del IDEGER relacionado con los riesgos de la edificación, mediante oficio IDR 20184100051611 del 28 de marzo de 2018, por lo que tal pronunciamiento se hacía necesario para medir los parámetros que apoyaran la valoración patrimonial para definir el grado de intervención de los elementos no estructurales.

d) Ampliación No. 3 a la Suspensión No. 1, por quince (15) días más de plazo, comprendidos entre el 12 de junio de 2018 al 26 de junio de 201, quedando como nueva fecha de terminación el 29 de abril de 2019, cuyo argumento del contratista, Unión Temporal San Antonio IDR Reforzamiento ASEMAIN, fue que se necesitaba una adición en costos consensuado entre el contratista, la interventoría y el IDR, la adición según el contratista se fundaba sobre la necesidad de obtener el estudio de valorización del patrimonio del inmueble objeto del contrato, documento que fue solicitado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), sin el cual no se podía continuar con el trámite de licencia de construcción, con base en ello no era posible continuar con la ejecución del contrato sin que previamente se hubiera definido la adición y prórroga del contrato.

e) Ampliación No 4 a la Suspensión No. 1, esta ampliación se realizó por ocho (8) días, periodo comprendido entre el 27 de junio de 2018 hasta el 4 de julio de 2018, quedando como nueva fecha de terminación el 7 de mayo de 2019, el argumento de la suspensión se fundó que a la fecha no se habían superado la totalidad de las causas que conllevaron a la suspensión del contrato, por lo que se hacía necesario tal ampliación del término, una vez aprobado el costo de la valorización por parte del IDR.

Hecho Décimo Tercero. - Una vez superado el tema de las ampliaciones y suspensiones citadas en los hechos anteriores, se Reinició No. 1 el contrato 2937 de 2017, el día 6 de julio de 2018, quedando como nueva fecha de terminación del contrato 9 de mayo de 2019.

Hecho Décimo Cuarto. - Tres (3) meses después del reinicio del contrato, se acordó entre el contratista, el interventor y el IDR, la Suspensión No. 2, por treinta (30) días, desde el 9 de agosto de 2018 hasta el 8 de septiembre de 2018, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el 9 de julio de 2019, lo anterior con el fin de obtener aprobación del IDPC de los ajustes a diseños de la licencia de construcción emitida por la curaduría Urbana No. 5.

Hecho Décimo Quinto.- Posteriormente el Contratista, Unión Temporal San Antonio IDR Reforzamiento Asemain, y la interventoría, solicitaron suspender el contrato 2937 de 2017, en razón a que las causas que propiciaron la suspensión No. 2 persistían, es decir se encontraban pendientes de la aprobación de los ajustes de diseños y la de la licencia de construcción por parte del IDPC, por lo que con base en lo anterior se aprobó la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 por treinta (30) días, comprendidos entre el 8 de septiembre de 2018 hasta el 7 de octubre de 2018, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el 5 de agosto de 2019.

Hecho Décimo Sexto. - En atención a lo expuesto en el hecho anterior, el contratista a través de la interventoría (Consorcio SB, Contrato 2999 de 2017), solicita una ampliación a la suspensión No. 2, con el argumento "... que de acuerdo con el seguimiento adelantado por la interventoría (Interventoría SB Contrato 2999-2017) se evidenció que las actividades referentes al trámite de licencia de reforzamiento estructural de la UDS y el aval de intervención por parte del IDPC no han concluido". En atención a lo anterior se aceptó la Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 2 por el término de 30 días, desde el 8 de septiembre de 2018 hasta el 6 de noviembre de 2018, ampliando el término de terminación del contrato hasta el 4 de septiembre de 2019.

Hecho Décimo Séptimo. - El contratista antes de concluir la Ampliación No. 2 a la Suspensión No 2, volvió a solicitarle a la interventoría SB, una nueva ampliación al contrato 2937 de 2017, con el argumento "... que solicita la ampliación de la suspensión con el fin de adoptar y manejar las acciones y riesgos que le competen previa revisión de los hechos por parte de la interventoría". En atención a ello la Interventoría SB manifestó que "de acuerdo con el seguimiento adelantado por la interventoría se evidencia que las actividades referentes al trámite de licencia de reforzamiento estructural de la UDS y el aval del IDPC no han concluido continuaba sin concluir el trámite para el aval por parte del IDPC". Con fundamento en lo anterior se procedió a realizar la Ampliación No. 3 a la Suspensión No.2, por el término de treinta (30) días más, contados a partir del 7 de noviembre de 2018 hasta el 6 de diciembre de 2018, quedando como nuevo plazo de terminación el 4 de octubre de 2019.

Hecho Décimo Octavo. - Superados los inconvenientes anteriores se procedió al REINICIO No. 2, el día 6 de diciembre de 2018, en razón a que el día 28 de noviembre de 2018, el contratista contaba para ese momento con la Resolución de la Licencia de Construcción, mediante el reforzamiento del 27 de noviembre de 2018, No LC-18-5.0557, de la Curaduría Urbana No. 5, por lo que la nueva fecha de terminación del contrato sería el día 25 de septiembre de 2019.

Hecho Décimo Noveno. - Reiniciado el contrato 2937-2017, el día 6 de diciembre, al parecer por haberse superado el tema de la Licencia de Construcción, tal y como se estableció en el hecho anterior, se presentó una inhabilidad sobreviniente por incumplimiento reiterado del contratista interventor del contrato, La Firma CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A., con Nit. 880.451.253-1, integrante del Consorcio SB, el cual fue informado mediante radicado IDR No.2019100307292 del 23 de agosto de 2019, por estar sancionado por incumplimiento

parcial por entidades estatales, en la misma vigencia fiscal. Ante tal situación se procedió a realizar la **Suspensión No. 3**, estableciendo un plazo de doce (12) días, comprendidos entre el 28 de agosto de 2019 hasta el 8 de septiembre de 2019, estableciéndose como nueva fecha para la terminación del contrato el 7 de octubre de 2019.

Hecho Vigésimo. - La firma interventora, CIVING Ingenieros SAS, integrante del Consorcio SB, mediante radicado IDR No. 20192100307292 del 23 de agosto de 2019 solicita la suspensión del contrato y pone en conocimiento del IDR la inhabilidad sobreviniente y una vez el Instituto corroboró la información con el RUP, se confirma las condiciones de la inhabilidad sobreviniente por el incumplimiento con dos entidades estatales en la misma vigencia fiscal. Para el 9 de septiembre se continuaba evaluando la cesión del contrato interventoría que cumplieran el perfil y experiencia, por lo cual se acordó la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 3, por diez (10) días, desde el 9 de septiembre de 2019 hasta el 18 de septiembre de 2019, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el 17 de octubre de 2019.

Hecho Vigésimo Primero.- Nuevamente se acordó realizar Ampliación No 2 a la suspensión No. 3, por el termino de once (11) días, contados a partir del 19 de septiembre de 2019 hasta el 29 de septiembre de 2019, quedando como nueva fecha de terminación del contrato 2937-2017, el 28 de octubre de 2019, con fundamento en que para esta fecha se estaba adelantado el trámite de cesión del contrato de interventoría 2999 de 2017, la cual una vez autorizado por el IDR, en nuevo interventor debía contar con un tiempo prudencial para recibir la información objeto de vigilancia y la conformación de su equipo de trabajo.

Hecho Vigésimo Segundo. - Con fundamento en el hecho anterior y en vista de las circunstancias, las partes acordaron realizar una nueva Ampliación No. 3 a la suspensión No.3, por seis (6) días, desde el 1 de octubre hasta el 6 de octubre de 2019, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el tres (3) de noviembre de 2019, hasta que se seleccionara la interventoría para darle reinicio al contrato.

Hecho Vigésimo Tercero.- Después de casi tres (3) meses de haberse reiniciado el contrato 2937 de 2017, el contratista, Unión Temporal San Antonio IDR Reforzamiento ASEMMAIN, mediante radicado UT S-A 2937-484 del 20 de enero de 2020 SOLICITÓ SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 2937-2017, la cual fue aprobada por la Interventoría Consorcio Santa Paula 008, mediante radicado IDR No 20202100023762 del 23 de enero de 2020, avalada por la Subdirección Técnica de Construcciones del IDR, aprobando la **Suspensión No. 4** por un término de quince (15) días, desde el cuatro (4) de febrero de 2020 al 18 de febrero de 2020, estableciendo como nueva fecha de terminación el 19 de febrero de 2020, estableciéndose como fecha de terminación el 5 de marzo de 2020.

Hecho Vigésimo Cuarto.- Según informe de la Subdirección de Contratación e informe de Interventoría del 8 de junio de 2020, en atención con lo contemplado en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y como quiera que el plazo contractual venció el 5 de marzo de 2020 fecha en la cual el IDR hizo toma de posesión de la obra el 6 de marzo de 2020, y su etapa de liquidación pactada en el contrato se estipuló 4 meses.

3.2. ESTADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO PRINCIPAL 2937-2017 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE INTERVENTORIA PRESENTADO POR EL CONSORCIO SANTA PAULA 008 JUNIO 2020.

Hecho Vigésimo Quinto. - Una vez terminado por vencimiento del plazo pactado el contrato 2937 de 2017, y como quiera que hubo actividades que no fueron ejecutadas y precios no previstos sin legalizar; se realizó el análisis por parte de la interventoría de la ejecución del contrato de obra 2937 de 2017, arrojando el siguiente resultado:

% CONTRATO	% EJECUTADO	% NO EJECUTADO
100%	38.80%	61.20%

Es decir que el contratista, UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, a la fecha de terminación del contrato 5 de marzo de 2020, se evidenció la NO ejecución del contrato 2937 de 2017, en un 61.20% del 100% a ejecutar.

Hecho Vigésimo Sexto. - Durante el desarrollo del contrato la Interventoría emitió varias solicitudes al contratista por insuficiencia de personal de obra y falta de materiales que impidieron entre otros que se lograra el cumplimiento del alcance de las obras contratadas en el plazo establecido en el contrato, documentos que se aportaran como prueba en esta demanda.

Hecho Vigésimo Séptimo. - De conformidad al informe de interventoría 2020, presentado por el Consorcio Santa paula 008, el porcentaje de ejecución del contrato fue del 38.80% del 100% contratado, y que de acuerdo con lo evidenciado el estado físico de la Unidad Deportiva el Salitre es la siguiente:

.- Modulo A

En el cual funciona la liga de ajedrez, la liga de lucha olímpica, la liga de pesas y la liga de karate. La estructura metálica de la cubierta y la teja de asbesto cemento está totalmente retirada, el piso de madera de la liga de karate está retirada, los pisos de las ligas de ajedrez, liga de lucha olímpica se encuentran en baldosas y no se demolieron, los elementos sanitarios, lavamanos y orinales se dejaron totalmente desmontados, las baldosas del piso el enchape de las paredes de los baños están totalmente demolidos y retirados, los techos no tiene cielo raso y los muros perimetrales de fachada y muros divisorios se encuentran en pie.

La estructura metálica de este módulo **A** izada es la siguiente:

MODULO	LIGA	COLUMNAS	VIGAS TRANSV.	VIGAS LONGIT
A	PESAS	4	2	4
	LUCHA OLIMPICA	5	2	4
	GIMNACIO MULTIF	3	2	3
	KARATE	8	2	2
	PESAS – LUCHA OLIMPICA0	0	0	1
TOTALES		20	8	14

En este módulo A, de acuerdo con los informes de interventoría y las visitas realizadas al lugar de la obra y a los talleres, el contratista no realizó más izajes, ya que no contaba con materiales en los talleres de fabricación para realizar esta actividad, lo que generó que la interventoría

(Consortio Santa Paula 08) expidiera varios oficios con registro fotográfico al IDRD, solicitándole celeridad en los procesos tanto de suministro, fabricación y montaje de estos.

La interventoría del contrato 2937-2017 pudo determinar lo siguiente en el Módulo A:

a) Quedó pendiente el suministro, fabricación y montaje de los elementos estructurales restante de las columnas, vigas transversales y vigas longitudinales, riostras, correas, cruces y columnetas metálicas para la fijación de anclajes para sostener los muros de fachada y los prefabricados ubicados sobre las ventanas. A continuación, se presenta el resumen de la estructura metálica del módulo A:

MODULO A	SUMINISTRO	IZADO
TOTAL KG MOD. A EN OBRA	80.756,29	49.515,36
TOTAL KG MOD. A FABRICAR	165.680,05	
TOTAL KG MOD. A PENDIENTES	84.923,76	

b) Quedo pendiente en el Pendiente vidrios por cambiar o colocar ya que fueron rotos por el contratista durante el proceso de izaje de las columnas y de las vigas metálicas y fueron cuantificados para los daños causados en el presente informe. En este módulo no se realizó el respectivo amarre de los elementos prefabricados de la fachada.

2.- Módulo B

En este módulo funciona la liga de tenis de mesa, gimnasia, judo y boxeo.

10

a) La estructura metálica de la cubierta y la teja de asbesto cemento quedo totalmente retirada, los pisos de las ligas de tenis de mesa, la liga de gimnasia, la liga de judo, se encuentran en baldosa y los pisos de la liga de boxeo que estaba en madera especial, ésta retirado.

Los aparatos sanitarios, lavamanos y orinales al igual que los espejos y las divisiones de los baños están totalmente desmontados y retirados. Las baldosas del piso y el enchape de las paredes de los baños estaban totalmente demolidos y retirados, la placa del piso esta demolida, los techos están sin cielo raso y los muros en ladrillo perimetrales de fachada y muros divisorios se encuentran en pie.

El estado de la estructura metálica izada del Módulo B es la siguiente:

CANTIDAD DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METRO perimetral						
MODULO	LIGA	COLUMNAS	VIGAS TRANSV.	VIGAS LONGIT.	CORREAS	RIOSTRAS
	GIMNASIA	9	8	14	39	7
	TENIS DE MESA	7	6	10	26	0

B	GIMNASIA MESA TOS DE	0	0	3	0	0
	JUDO	3	2	2	0	0
	BOXEO	5	4	5	13	0
	JUDO - BOXEO	0	0	2	0	0
	TOTALES	24	20	36	78	7

b) En el Módulo B, quedó pendiente el suministro, fabricación y montaje de los elementos estructurales:

MÓDULO B		SUMINISTRO	IZADO
TOTAL KG MOD. B EN OBRA		136.560,04	100.289,71
TOTAL KG MOD. B FABRICAR		184.648,98	
TOTAL KG MOD. B PENDIENTES		48.088,94	

3. En el Módulo C

En este módulo funcionaba la liga de baloncesto, la liga de voleibol, la liga de esgrima y el auditorio, el estado en que se encuentra es el siguiente: La estructura metálica de la cubierta y la teja de asbesto cemento está sin desmontar, los pisos de las ligas de baloncesto, la liga de voleibol, la liga de esgrima, estaban en madera y están retirado; Los aparatos sanitarios, lavamanos y orinales al igual que los espejos y las divisiones de los baños están totalmente desmontados y retirados.

a) Las baldosas del piso y el enchape de las paredes de los baños están totalmente demolidos y retirados, la placa del piso esta demolida, los techos están sin cielo raso y los muros en ladrillo perimetrales de fachada y muros divisorios se encuentran en pie. Las columnas de concreto de este módulo cuentan con vigas en concreto reforzado conformando los capiteles fundidos en concreto reforzado, están fundidos todos los pedestales pegados a las caras de las columnas internas con sus respectivos hierros y sus pernos roscados.

El Auditorio se encuentra en el estado inicial, cuenta con mobiliario como es la silletería, las paredes y el techo se encuentran en madera, la cual se observa en buen estado de conservación; los baños están con sus correspondientes baterías sanitarias, no presentan suministro de agua; la fachada en mampostería perimetral presenta fisura considerable por el costado norte del Auditorio, que se debe tener en cuenta ya que puede presentar colapso.

El estado de la estructura metálica izada del Módulo C es la siguiente:

En este módulo no existe gráfico de izaje para reforzamiento de la estructura, porque la interventoría evidenció que el contratista de obra, no tenía material en los talleres de

fabricación para realizar esta actividad , esta Interventoría Consorcio Santa Paula 08) realizo en varias ocasiones visita a los talleres para verificar que se tuviera material suficiente para la fabricación de los elementos estructurales, producto de estas visita se enviaron comunicados al contratista de obra con registro fotográfico solicitando celeridad en los procesos tanto de suministro, fabricación y montaje de los mismos, igualmente se enviaron oficios con registro fotográfico y acta de visita realizada en los talleres al IDRD, para que la entidad conociera y estuviera al tanto de esta situación. Se colocaron e izaron columnas para reforzamiento de muros y vigas en accesos (entre ligas de baloncesto y voleibol).

En razón a que el contratista nunca presentó soporte que permitiera conocer el estado de la fabricación de la estructura metálica, ni su llegada a la obra, en el Acta de Comité de seguimiento No 50, de fecha 07 de enero de 2020, el Interventor, Consorcio Santa Paula 008, le recomendó al contratista no desmontar la cubierta de este módulo hasta que no tuviera la estructura metálica del mismo fabricada y suministrada en obra, lo cual no ocurrió en el desarrollo del contrato, a lo que el contratista no manifestó oposición.

b) En relación con la estructura arriba señalada en los Módulos A, B Y C y la que quedó pendiente por izar y del material que quedó en piso es la siguiente:

CUADRO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA - UDS				
ITEM	MÓDULO A	MÓDULO B	MÓDULO C	TOTAL
TOTAL ESTRUCTURA (kg)	165.680,05	184.648,98	203.750,65	554.079,68
IZADO(kg)	49.515,36	100.289,71	57,90	149.862,96
MATERIAL QUE ESTÁ EN EL PISO SIN IZAR (kg)	31.240,93	36.270,33	10.725,96	78.237,22
FALTA POR IZAR	116.164,69	84.359,27	203.692,76	404.216,72

3.3 RELACION DE ACTIVIDADES QUE SE ADELANTARON POR PARTE DEL IDRD EN EL MARCO DE LA FACULTAD SANCIONATORIA EN EL CONTRATO 2937 DE 2017.

Hecho Primero.- A raíz de los incumplimientos presentados por el contratista, Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain, la Subdirección de Contratación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, de conformidad con el literal b) artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante radicado 20208000110071 del 28 de septiembre de 2020, se citó para inicio de procedimiento sancionatorio el día 9 de octubre de 2020 por el presunto incumplimiento del Contrato 2937 de 2017, cuyo Objeto consistió: *“Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, las obras de la primera etapa del reforzamiento estructural y adecuaciones arquitectónicas, de la Unidad Deportiva el Salitre de Bogotá D.C.; Parque Simón Bolívar 12-091, con cargo al proyecto 1082 “Construcción y Adecuación de Parques y Equipamiento para Todos”.*

El trámite administrativo sancionatorio iniciado por la Subdirección de Contratación se dio con ocasión del informe presentado por la interventoría (Consorcio Santa Paula 008) en junio de 2020 y el cual fue remitido por la supervisión del contrato mediante radicado IDRD No. 20204200297963 que dio alcance al radicado IDRD No.20204200264563 documentos que se aportan con la presentación de la demanda.

Hecho Segundo. - Durante el transcurso del procedimiento Administrativo sancionatorio se ventiló y demostró las siguientes circunstancias de hecho de presuntos incumplimientos, por parte del contratista, tales como:

a). Incumplió con la cláusula quinta del contrato 2937-2017, en lo relacionado con el plazo de ejecución, que se pactó en: “El plazo de ejecución se estima en **Trece (13) meses**, contados a partir de la aprobación de la garantía única y suscripción del acta de inicio. El plazo se encuentra discriminado así: Periodo de coordinación: Quince (15) días. Periodo de trámite de licencias: Dos y medio (2.5) meses. Periodo de Construcción: Diez (10.0) meses.” El cual fue modificado mediante la suscripción de la **MODIFICACIÓN No. 1 y 3**, así como por las suspensiones 1, 2, 3 y 4 junto con sus correspondientes ampliaciones acontecidas en el desarrollo del contrato, quedando como **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO** el día 05 de marzo de 2020, fecha que no fue cumplida por el contratista **UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD EFORZAMIENTO ASEMAIN** dado que no entregó los productos establecidos en el periodo de construcción dentro del plazo pactado y por el contrario evidencia, de conformidad con lo establecido en el informe de la interventoría con radicado No. 20202100123622 del 21 de julio de 2020, que, para fecha del término del plazo de ejecución del contrato de obra, se presenta un **avance físico de 38,80% y una NO ejecución del 61.20%** a la fecha de finalización de contrato, 5 de marzo de 2020.

b). El indebido Manejo y Debida Inversión el Anticipo. El contratista no cumplió con lo contemplado en la cláusula 2da OBLIGACIONES CONTRACTUALES contempladas en el Contrato de Obra Nro. 2937 de 2017 “Serán obligaciones del contratista, las consagradas en el anexo denominado "CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" referente al manejo y correcta inversión del anticipo, la cual en el **anexo especificaciones técnicas**, se encuentra en el numeral 3 **planes, programas y documentos del proyecto**, numeral 3,5 **plan de manejo de inversión del anticipo de las obligaciones del contratista**, que consagra que el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN se comprometió a:

“1. El anticipo únicamente deberá destinarse para el pago de los rubros aprobados en el plan de inversión de anticipo aprobado por el interventor y que sean necesarios para la ejecución de la obra, objeto del presente contrato.”

“3. La fiducia o patrimonio autónomo deberá realizar los giros directamente a los proveedores después de la presentación ante la fiduciaria, por parte del CONTRATISTA, de la factura correspondiente, elaborada por parte del proveedor, la cual debe estar debidamente aprobada por el interventor. Las copias de los anteriores documentos aprobados por el INTERVENTOR deberán ser presentados por el CONTRATISTA en el informe del siguiente mes.”

“9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, la información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por Organismos de Control Fiscal, como también por el IDRD

“El anticipo deber ser invertido exclusivamente en la compra o arriendo de equipos, compra de materiales, transporte de equipos o de materiales y pago de mano de obra no calificada. Por lo que el fin del anticipo es garantizar la

adquisición de manera oportuna de insumos, materiales o equipos o elementos que requieran ser instalados o incorporados en el proyecto, así como la mano de obra no calificada del mismo”.

AMORTIZACIÓN: La amortización, entendida como la forma en el que el contratista extingue la deuda contraída con la entidad por el préstamo de los recursos públicos desembolsados a título de anticipo, se hará descontando de cada acta de pago el mismo porcentaje a aquel pactado por concepto de anticipo, hasta completar el monto total de este, (Los impuestos y retenciones que se causen por el desembolso del anticipo están a cargo del contratista).

INVERSIÓN Y LEGALIZACIÓN: Para los pagos que se hagan con los recursos del anticipo se deben contar con el visto bueno de la interventoría presentando un oficio remisario de autorización de pago dirigido a la fiduciaria, anexando soportes contables requeridos para soportar el desembolso.

“El plazo máximo para la legalización del anticipo, será la firma del acta de recibo final del contrato. Dicha legalización deberá estar acompañada del informe final de inversión del anticipo, el cuadro consolidado desembolsos respecto al plan e inversión vigente, el reporte de rendimientos financieros generados y los soportes de las respectivas devoluciones al IDR, igualmente deberá remitirse el cierre de la fiducia paz y salvo ante la fiduciaria.

INFORME DE INVERSIÓN: Deberá presentarse informes mensuales de inversión de anticipo el cual será presentado por el contratista a más tardar dentro del mes siguiente a la inversión de los recursos y deberá contar con todos los soportes requeridos. Bajo ninguna circunstancia, podrá legalizarse el anticipo con ofertas mercantiles ni demás títulos previstos en la ley mercantil. (lo subrayado es nuestro)

El informe mensual es un documento detallado en el que se evidencia los desembolsos realizados en el mes objeto del informe, el cual debe ir acompañado del extracto de la fiducia y su respectiva conciliación bancaria, y cada uno de los giros realizados soportados con: la carta de autorización por parte del interventor del soporte individual o comprobante de giro por parte de la fiducia y la factura o documento contable y sus anexos en caso de requerirse.”

c). En atención a lo anterior y de conformidad con el acervo probatorio que se aportó con la demanda, la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO A SEMAIN, incumplió con las obligaciones a cargo del manejo del anticipo de obra (según se probó en sede administrativa), debido a que el contratista de obra no solicitó la totalidad de giros del anticipo a proveedores directos, adicionalmente incumplió los requisitos de cumplimiento de requisitos contables como facturación, informes mensuales con el lleno de los requisitos, amortización y legalización del anticipo en los plazos pactados. De la misma manera cuando le fueron requeridos los debidos soportes por la oficina de Control Interno que no fueron entregados.

Hecho Tercero. - El procedimiento administrativo sancionatorio finalizó con la expedición de las Resoluciones 1452 del 27 de octubre de 2022 que declaró el incumplimiento parcial del contrato, la 1825 del 22 de diciembre de 2022 que resolvió el Recurso de Reposición contra la Resolución 1452, por parte de la Subdirección de Contratación, en la cual resolvió

lo siguiente:

“Primero: Declarar el incumplimiento del Contrato 2937 de 2017 (...)

Artículo Segundo: aclarar el artículo segundo de la Resolución No. 1452 del 27 de octubre de 2022, la cual quedara así:

Artículo Segundo: Hacer efectiva la cláusula penal pactada en el contrato de obra por valor de \$1.446.308.108, que corresponde al 61.2% de ejecución del contrato en proporción al valor total pactado de la cláusula de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo Tercero: aclarar el artículo tercero de la Resolución No. 1452 del 27 de octubre de 2022, la cual quedara así:

“ARTICULO TERCERO: Declarar la ocurrencia del siniestro del amparo de cumplimiento de la garantía única identificada con el No. AA027962, expedida por aseguradora La Equidad Seguros, por el \$1.446.308.108 correspondiente al 61.2% de inejecución del contrato en proporción al valor total pactado de la cláusula, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo

El Valor de la cláusula penal deberá ser consignada por el contratista dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, a favor del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDR identificada con el NIT. 860061099-1 en la cuenta de ahorros No. 007700683878 del BANCO, por las razones expuestas en el presente acto administrativo.

En caso de que no se consigne el valor de la cláusula penal impuesta a través de la presente resolución, deberá ser descontada de los saldos a favor del contratista la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo en virtud de la figura jurídica de la compensación de deudas.

Si ello no fuere posible, el valor que corresponde a la cláusula penal se hará efectivo y deberá cancelarse por la aseguradora La Equidad Seguros, con cargo al amparo de cumplimiento de la póliza No. AA027962, constituida con ocasión del Contrato de Obra No. 2937 de 2017, dentro del mes siguiente a la ocurrencia y acreditación del siniestro de conformidad con el Artículo 1080 del Código de Comercio.”

Artículo Cuarto: Aclarar el artículo cuarto de la Resolución No. 1452 del 27 de octubre de 2022, la cual quedara así:

“ARTÍCULO CUARTO: Declarar el incumplimiento y en consecuencia ordenar la ocurrencia del siniestro amparado en la Póliza Garantía Única No. AA027962, expedida por aseguradora La Equidad Seguros, por concepto del amparo de correcta inversión del anticipo por la suma de \$2.876.172.668, conforme la parte motiva del presente acto administrativo.

(...)

Artículo Quinto: Confirmar los demás artículos de la parte resolutive de la Resolución 1452 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022 “Por medio de la cual se adopta decisión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio del Contrato de Obra IDR-CTO-2937 de 2017”.

(...)

(...)

Hecho Cuarto. - Finalmente se dictó la Resolución 1858 del 28 de diciembre de 2022 en la cual se aclaró la Resolución 1825 del 22 de diciembre de 2022, en relación con indicar la cuenta de ahorros en la cual Seguros la Equidad debía consignar las sumas de dinero ordenadas en la Resolución 1825 con cargo a la póliza AA027962

Hecho Quinto.- Que como consecuencia de las declaraciones hechas en las resoluciones 1452 del 27 de octubre de 2022, 1825 del 22 de diciembre de 2022 y la 1858 del 28 de diciembre de 2022, Seguros la Equidad el día 31 de marzo de 2023 realizó un primer pago con cargo a la póliza AA027962, por la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$2.161.240.388.00), tal y como quedó informado en el memorial de subsanación de la demanda presentado ante su Despacho el día 27 de abril de 2023

Hecho Sexto. - Que con fecha 8 de mayo de 2023, se informó al Despacho mediante memorial, que Seguros la Equidad, en cumplimiento de lo ordenado en las Resoluciones 1452, 1825 y 158 de 2022, realizó un segundo pago, el cual fue consignado a la cuenta de ahorros del IDR – Banco Davivienda, por la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$2.161.240. 388.00).

Hecho Séptimo. - Que como se informó al Despacho en el Memorial fechado 8 de mayo de 2023 por el cual se dio alcance al memorial del 27 de mayo de 2023, en total Seguros la Equidad, consignó a favor el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$4.322.480. 776.00)

3.4. ANTECEDENTES PROCESO DE SELECCIÓN, ADJUDICACION Y MODIFICACIONES AL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL IDR Y EL CONSORCIO SB (CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2999 DE 2017).

Hecho Primero. - El Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD, mediante acto administrativo del 28 de julio de 2017, convocó al concurso de méritos No. IDR-STC-CM-008-2017, cuyo objeto consistía en: “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA, DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTA D.C., PARQUE SIMON BOLIVAR - 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS”.

Hecho Segundo. - Como consecuencia de lo anterior mediante acto administrativo del 26 de septiembre de 2017, el IDR adjudicó el concurso de méritos al CONSORCIO SB, integrado por las siguientes empresas: CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS, identificado con el NIT 860.451.253-1 con el 60% y VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS, identificado con el NIT. 900.416.314-9 con el 40%, por un valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL, PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$557.461.000.00).

Hecho Tercero. - El plazo de ejecución acordado para desarrollar el objeto contractual y las obligaciones pactadas, se acordó en catorce meses (14) contados a partir de la aprobación de la garantía única y suscripción del acta de inicio. El plazo de ejecución se encuentra discriminado así: Periodo de Coordinación: Quince (15) días. Periodo de trámite de licencias: Dos y medio (2.5) meses. Periodo de Construcción: Diez (10.0) meses. Periodo de Liquidación: Un (1.0) mes.

Hecho Cuarto. - Como consecuencia de lo anterior se suscribió el contrato 2999 de 2017 entre el IDR y el Consorcio SB, el 10 de octubre de 2017

Hecho Quinto. - El Acta de inicio se suscribió el día 16 de noviembre de 2017 una vez aprobadas las garantías.

Hecho Sexto. - Dentro del contrato Ibidem las partes que conformaron el acuerdo de voluntades pactaron las siguientes obligaciones contractuales generales a cargo del contratista:

"(...) CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. — Este contrato se regirá en general por las normas civiles y comerciales vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios... (...)" (negritas y subrayado propio).

Hecho Séptimo. - En el Numeral 5º del Contrato No. 2999 de 2017, las partes del acuerdo de voluntades establecieron las siguientes obligaciones específicas a cargo del contratista:

"(...) Además de las contenidas en la ley, la que se desprendan de la naturaleza del contrato, las Señaladas en el pliego de condiciones, documentos previos y el contrato y en especial las contenidas en el anexo técnico... (. . .)".

Hecho Octavo. - Dentro del documento de anexo técnico del pliego de condiciones del proceso de selección No. IDR-STC-CM-008-2017. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR, determinó entre otras las siguientes obligaciones del contratista, a saber:

"(...) 4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Adicionalmente el interventor tendrá la obligación relacionada con su contrato de:

Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempos pactados, de acuerdo con la oferta presentada ... (...)” (Negritas propios).

En el mismo documento indica:

“Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y las normas que la adicionen, complementen o modifiquen”.

Hecho Noveno. - Mediante radicado IDRD No. 20192100307292 con referencia contrato No. 3812-2018, contrato No. 3795-2018, contrato No. 1513-2017, contrato 2999-2017 en el asunto; “Solicitud suspensión de interventoría de fecha 23 de agosto de 2019, CIVIG INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. en calidad de integrante del CONSORCIO SB informa acerca de la inhabilidad sobreviniente por incumplimientos parciales en diferentes entidades, relacionando las siguientes resoluciones:

- Resolución No. 46 de 15 de mayo de 2018, expedida por el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, “Por la cual se RESUELVEN los recursos de reposición promovidos frente a la resolución 36 de 2018, por la cual se declara el incumplimiento y la ocurrencia del siniestro de mala o deficiente calidad del servicio prestado dentro del contrato de interventoría No 2125 de 2011 cuyo objeto fuere la INTERVENTORIA DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”
- Resolución No 00851 de 06 de marzo de 2019 “Por medio de la cual se adopta decisión dentro de la actuación administrativa iniciada para determinar el posible incumplimiento del contrato No 823 de 2013”. Acto administrativo que en artículo primero de la parte resolutiva, dispone “CONFIRMAR en su totalidad el contenido de la Resolución 00851 del 06 de marzo de 2019 “por medio de la cual se adopta la decisión dentro de la actuación administrativa iniciada para determinar el posible incumplimiento del contrato 823 de 2013” y la por la cual se declaró el incumplimiento parcial del contrato No IDU -823-2013 cuyo objeto es; “INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL PLAZONETA Y SÓTANO DE PARQUEADEROS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LAS OBRAS DEL ESPACIO PUBLICO HASTA EL COSTADO NORTE DE LA CALLE 26, EN EL MARCO DE UNA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO CONJUNTO MONUMENTAL CAD EN BOGOTÁ D.C.”, contrato suscrito entre el IDU y CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S, NIT 860.451.253-1, representado por FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO, identificado con cédula No 19.123.324”, conforme a la expuesto en la parte motiva del mencionado acto administrativo.
- Resolución No. 489 de 17 de diciembre de 2018, expedida por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del Distrito, “Por medio do la cual se decide la actuación administrativa sancionatoria contractual adelantada en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 - Contrato de Interventoría No. 3556 del 13 de diciembre de 2013, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. (antes CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. en C.)”

Hecho Décimo. - A lo largo de la ejecución del Contrato de Interventoría tuvo las siguientes, modificaciones, ampliaciones y suspensiones:

MODIFICACIONES								
PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCION	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
SUSPENSION 1	30 dias	12-feb-18	12-feb-18	13-mar-18	16-feb-19	N.A		
AMP SUSPENSION 1	60 dias	14-mar-18	14-mar-18	12-may-18	15-abr-19	N.A		
AMP SUSPENSION 2	30 dias	11-may-18	13-may-18	11-jun-18	14-may-19	N.A		
AMP SUSPENSION 3	15 dias	12-jun-18	12-jun-18	27-jun-18	29-may-19	N.A		
AMP SUSPENSION 4	8 dias	27-jun-18	28-jun-18	5-jul-18	6-jun-19	N.A		
PRORROGA 1	1 mes	9-jul-18	10-jul-18	9-ago-18	7-jul-19	N.A		
SUSPENSION 2	30 dias	9-ago.-18	9-ago.-18	8-sep.-18	9-ago.-19	N.A.		
AMP 1 SUSPENSION 2	30 dias	7-sep.-18	8-sep.-18	7-oct.-18	5-sep.-19	N.A.		
AMP 2 SUSPENSION	30 dias	7-oct-18	8-oct-18	6-nov-18	5-oct.-19	N.A.		

2								
AMP 3 SUSPENSION 2	30 dias	6-nov-18	7-nov-18	6-dic-18	4-nov.-19	N.A.		
REINICIO 2		28-nov.-19			26-oct.-19	N.A.		
SUSPENSION 3	12 dias	28-ago.-19	28-ago.-19	8-sep.-19	7-ene.-19	N.A.		
AMP 1 SUSPENSION 3	10 dias	9-sep.-19	9-sep.-19	18-sep.-19	17-nov.-19	N.A.		
REINICIO 3		28-nov.-19			4-nov.-19	N.A.		
MODI 2 PRORROGA 2	3 meses /16 dias	15-nov.-19	18-nov.-19	4-mar.-20	4-mar.-20	N.A.		
SUSPENSION 4	15 dias	4-feb.-20	4-feb.-20	18-feb.-20	19-feb.-20	N.A.		
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 4	15 dias	19-feb.-20	19-feb.-20	4-mar.-20	5-mar.-20	N.A.		
REINICIO 4		4-mar.-20			5-abr.-20	N.A.		
TOTAL ADICIONES:							\$	-

Hecho Décimo Primero. - Por Acta consorcial suscrita el 9 de agosto de 2017, se designó al señor FABIAN ANDRÉS VALLEJO PACHÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.088.797, representante legal del Consorcio SB, tal como consta en la cláusula Cuarta del acta de la siguiente manera:

CUARTA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente CONSORCIO al Señor **FABIÁN ANDRÉS VALLEJO PACHÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.088.797**, expedida en Bogotá D.C., cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar el CONSORCIO. Igualmente se nombra como Suplente del Representante del CONSORCIO al Señor **STEPHAN VALLEJO PACHON**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.199.850**. **QUINTA: DURACIÓN:** la duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la adjudicación, será igual al tiempo comprendido entre la fecha de presentación y tres (3) años más contando desde la finalización del término de ejecución contractual. En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

3.4.1 CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Hecho Primero. - La firma interventora, CIVING Ingenieros SAS, integrante del Consorcio SB, mediante radicado IDRD No. 20192100307292 del 23 de agosto de 2019 solicita la suspensión del contrato y pone en conocimiento del IDRD la inhabilidad sobreviniente y una vez el Instituto corroboró la información con el RUP, se confirma las condiciones de la inhabilidad sobreviniente por el incumplimiento con dos entidades estatales en la misma vigencia fiscal. Para el 9 de septiembre se continuaba evaluando la cesión del contrato interventoría que cumplieran el perfil y experiencia, por lo cual se acordó la **Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 3**, por diez (10) días, desde el 9 de septiembre de 2019 hasta el 18 de septiembre de 2019, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el 17 de octubre de 2019. (Lo resaltado y subrayado es fuera de texto)

Hecho Segundo. - El CONSORCIO SB mediante radicado IDRD No. 20192100336912 presenta la empresa CONSORCIO SANTA PAULA 008 para posible cesión del contrato de interventoría, fechado 13 de septiembre de 2019 y hace entrega de la documentación para la evaluación del posible cesionario del contrato 2999-2017.

Hecho Tercero. - Mediante radicado 20194200610303 la Subdirección Técnica de

Construcciones remite a la Subdirección de Contratación la habilitación del CONSORCIO SANTA PAULA 008 como cesionario del contrato de interventoría 2999 de 2017.

Hecho Cuarto. - Mediante documento “Autorización Cesión Contrato 2999-2017” de fecha 20 de septiembre de 2019 las partes suscriben la cesión del contrato de interventoría.

3.5. RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE ADELANTARON POR PARTE DEL IDR EN EL MARCO DE LA FACULTAD SANCIONATORIA EN EL CONTRATO 2999 DE 2017.

Hecho primero. - El IDR adelantó en contra del Consorcio SB, en calidad de interventor del contrato 2937- 2017 dos (2) procesos sancionatorios, en los cuales se les declaró el incumplimiento parcial del contrato 2999-2017.

Hecho Segundo. – Como consecuencia de lo anterior el primer proceso Administrativo Sancionatorio culminó con las Resoluciones 799 del 6 de diciembre de 2019, 108 del 3 de marzo de 2020, que resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 799 y la Resolución 281 del 16 de marzo de 2023, por las cuales el IDR declaró el incumplimiento parcial del contrato 2999-2017, por los siguientes incumplimientos:

- a. No cumplir con las condiciones de experiencia de los residentes de obra
- b. Falta de aportes y pago de la seguridad social de los profesionales contratados
- c. No presentar los informes al supervisor del contrato

Hecho Tercero. – como consecuencia de los incumplimientos le Impuso al Consorcio SB a título de sanción, la cláusula penal del contrato, por la suma de **SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$71.134.826.00)**

20

Hecho Cuarto. Posteriormente el IDR a través de la subdirección de Contratación le abrió un nuevo proceso sancionatorio al CONSORCIO SB, el cual culminó con las Resoluciones 512 del 23 de mayo de 2023 y la 1162 de 2023 que decidió sobre el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior que declaró el incumplimiento parcial del contrato 2999-2017, por las siguientes razones:

1.- *Se concluye, que el contratista Consorcio SB incumplió sus obligaciones relacionadas con la adecuada vigilancia y seguimiento al manejo del anticipo entregado a la firma UNION TEMPORAL SAN ANTONIO UNIÓN IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN, en las condiciones legales y contractualmente pactadas y con los descargos y pruebas allegadas no adjunto pruebas o alegaciones que desestimarán el incumplimiento que hasta este momento era presunto; por el contrario, se confirmaron causas imputables al contratista que impidieron la ejecución normal de mismo.*

2.- *incumplimiento en la obligación de realizar seguimiento a los estudios y diseños aprobados bajo la licencia de construcción No. LC-185-1281 del 24 de diciembre de 2018, en su componente de cimentación, esto, con base a la modificación realizada a los diseños de cimentación de obra y de los cuales no se realizó trámite alguno ante la curaduría No. 5.*

3.- *No se encontró respuesta de las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato en cuanto a la subsanación de los informes de interventoría en la etapa de obra, lo anterior en el periodo de enero de 2019 a agosto de 2019 de 2019,*

evidenciando así que no existen saldos a favor para la interventoría en este tiempo, de entregarse a la supervisión lo cual permitiría el cumplimiento y seguimiento técnico, presupuestal, administrativo y HSEQ del contrato de obra vigilado por la interventoría, de acuerdo al ANEXO TECNICO del contrato 2999 de 2017.

4.- No se cumplió con la obligación de acreditar el personal mínimo que hace parte de los expedientes virtuales del contrato 2937 de 2017 y 2999 de 2017, no se evidencia informes donde conste la participación del contador de obras públicas aprobado por la interventoría, profesional Lizbeth Cristina Ospina bajo el radicado No. 20182100356362 del 19 de noviembre de 2018 por el Consorcio SB, la mencionada profesional debía cumplir con una participación del 5% en el plazo del contrato. Lo anterior con base a lo establecido en el contrato de obra 2937 de 2017 como personal mínimo.

Hecho Quinto. - En atención al decreto de incumplimiento parcial en que incurrió el Consorcio SB se impuso la cláusula penal pecuniaria pactada por las partes como una estimación anticipada de los perjuicios a cargo del contratista, por la suma de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$40.357.374).**

3.6 HECHOS RELACIONADOS CON LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INTERVENTOR Y QUE LLEVARON A SU DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO EN SEDE ADMINISTRATIVA, Y EN CONSECUENCIA LA CONTRATACION DE UNA PATOLOGÍA E INTERVENTORÍA SOBRE EL PREDIO UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS).

3.6.1 DETALLE DE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN SEDE ADMINISTRATIVA (MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 512 DE 2023 y 1162 DE 2023) AL CONSORCIO SB (CTO 2999-2017) EN CALIDAD DE INTERVENTOR DEL CONTRATO 2937-2017, POR NO REALIZAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA.

Hecho Primero.- Frente a lo anterior presento los siguientes hechos que permiten vincular al proceso y llamar en solidaridad al Consorcio SB pues la decisión judicial que se tome por parte del Despacho de Conocimiento los involucra de manera directa por las determinaciones tomadas en la ejecución del contrato 2937-2017, ya que fueron quienes aprobaron y dieron los vistos buenos para los giros y aprobaciones de las obras realizadas por la Unión Temporal San Antonio IDR Reforzamiento Asemain; lo anterior con el objeto que el Consorcio SB junto con sus integrantes responda por los perjuicios causados al instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDR, de acuerdo con los siguientes hechos que permiten inferir la presunta responsabilidad de la interventoría.

Hecho Segundo. - Al interior de este mismo documento el Instituto Distrital de Recreación y Deporte — IDR, estableció como deber por parte de la firma interventora (CONSORCIO SB) lo siguiente:

Acerca del seguimiento de los recursos entregados a modo de anticipo:

(...)

3.5 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

En los contratos de obra el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo en una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera, para lo cual se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

1. El anticipo únicamente deberá destinarse para e/ pago de los rubros aprobados en el plan de inversión de anticipo aprobado por e/ interventor y que sean necesarios para la ejecución de la obra, objeto del presente contrato.
2. Cualquier giro o movimiento que se realice en la fiducia o patrimonio autónomo, deberá ser autorizado previamente por el Interventor.
3. La fiducia o patrimonio autónomo deberá realizar los giros directamente a los proveedores después de la presentación ante la fiduciaria. Por parte del CONTRATISTA, de la factura correspondiente, elaborada por parte del proveedor, la cual debe estar debidamente aprobada por el INTERVENTOR. Las copias de los anteriores documentos aprobados por el INTERVENTOR deberán ser presentados por el CONTRATISTA en el informe del siguiente mes.
4. El término de la duración de la fiducia o encargo fiduciario será el necesario, para la amortización del anticipo, termino dentro del cual el CONTRATISTA deberá autorizar la totalidad de los recursos que reciba a título de anticipo.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, la información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal, como también por el IDR.(...)" (subrayado fuera de texto)

22

Hecho Tercero. - Mediante comunicado No. Inter-29-11-2017-005 se emite documento CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO por parte del Consorcio SB de fecha 29 de noviembre de 2017. Este indica: "Con base a los documentos presentados por el contratista de obra "UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN", para el trámite del Acta de inicio del Contrato de Obra 2937 de 2017, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el mismo, una vez realizada la revisión correspondiente y verificado que el contrato en mención se encuentra debidamente legalizado, se certifica su cumplimiento y se autoriza el trámite para la entrega del anticipo establecido."

Hecho Cuarto. - El comprobante No. 98417 de fecha 20 de diciembre de 2017 del Instituto Distrital de Recreación y Deporte — IDR, muestra que fueron desembolsados **CUATRO MIL TRECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$4.302.583.642)** por concepto de anticipo del contrato de obra 2937 de 2017.

Hecho Quinto. - Por otra parte, la firma Alianza S.A., entrega el informe de fiducia de fecha 6 de septiembre de 2019, donde manifiesta: "Que entre el día 25 de enero de 2018 y 31 de julio de 2019, Alianza Fiduciaria S.A., realizó treinta y tres (33) giros correspondientes a veinte (20) órdenes de pago recibidas por instrucción del

fideicomitente e interventor por la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$4.238.710.155).**

Hecho sexto. - Mediante comunicación con el radicado No. 20194200133411 con asunto *Reiteración requerimiento de informe de inversión del anticipo* de fecha del **TREINTA (30)** de julio de (2019) la supervisión del contrato solicita informe detallado de cada una de las inversiones del anticipo.

Hecho Séptimo. - Mediante comunicación con el radicado No. **SB-IDRD-2999-TEC- 342** con asunto *Solicitud para Complementar la información del Anticipo* de fecha del **TRES (3)** de agosto de dos mil diecinueve (2019) El consorcio SB solicita al contratista **UNION TEMPORAL SAN ANTONIO UNIÓN IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN** complementar la información entregada mediante 2192100272742 de fecha del veintiséis (26) de julio de dos mil diecinueve (2019). Manifestando lo siguiente:

Esta interventoría; CONSORCIO SB, solicita complementar la información entregada en el oficio No. UT S-A 2937:276, con una relación y copia de las facturas pagadas por cada uno de los Giros, donde se discrimine cada facturación el concepto, presentado en el giro.

Adicionalmente se solicita entregar copia de todos los contratos celebrados con terceros como soporte de la información correspondiente al manejo del anticipo.

De igual manera se le solicita dar respuesta de manera inmediata, a fin de darle transparencia al manejo del anticipo... (..) Ley 1712 de 2014 ... Ley de Transparencia y Acceso a la Información... Ley 1474 de 2011 Art. 1º.

23

Hecho Octavo.- Lo anterior deduce nuevamente que para el momento y luego de girado la totalidad del anticipo, según informe de fiducia, la interventoría no contaba con información y/o ejecución de obra que le permitiera informar a la Entidad acerca de la correcta y buen manejo del anticipo de obra entregado, es decir que la interventoría **CONSORCIO SB** no solicitó información oportunamente y pretende que el contratista en su buena fe le entregue y soporte al respecto, es decir que la interventoría nuevamente deja entre dicho el adecuado control y vigilancia al respecto.

Hecho Noveno.- Mediante comunicación con el radicado No. 20192100286672 con asunto *"INFORME MANEJO DEL ANTICIPO"* de fecha del ocho (08) de agosto de dos mil diecinueve (2019), la interventoría **CONSORCIO SB** entrega documento relacionado con el cambio de destinación de giros realizados para la fecha (giros 1 y 2) a la empresa **TRANINGCO**, relacionado con la compra de cubierta y compra de materiales para redes eléctricas e hidráulicas por un valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$382.666.641,00) y CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$486.157.892,00)** También se entrega una relación de los giros realizados, pero no se cumple con la totalidad de documentación solicitada por la supervisión en el radicado 20194200133411. Y en resumen se limita a entregar **TRECE (13)** anexos, sin conexión al concepto solicitado, donde debía indicar la inversión del anticipo, su uso y apropiación

debida o advertencia de posible incumplimiento de inversión y manejo hacia el Instituto.

Hecho Décimo. - Con fundamento en lo anterior se evidenciaba que la interventoría evaluaba modificar la destinación a los giros 1 y 2 entregados por un total \$868.824.533 Ochocientos Sesenta Y Ocho Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos MCTE. Esto, sin contar con concepto previo de legalidad, pues como bien se conoce en tratándose de recursos entregados por la entidad a modo de anticipo, no es posible que se admita que los giros sean aprobados por la interventoría dentro una programación de giros, el cual debe ir encaminado a las necesidades del contrato y posteriormente se pretenda modificar la misma.

Hecho Décimo Primero. - De la misma manera, en evaluación del Certificado de Existencia **TRANINGCO** empresa donde se realizaron diferentes giros del anticipo, indica que su objeto social es el siguiente: "LA SOCIEDAD PRESTARÁ SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS NATURALES GENERADORES DE CARGA: CONTANDO CON EL PERSONAL COMPROMETIDO Y CON EXPERIENCIA PARA GARANTIZAR CLUE SE REQUIEREN PARA EL EJERCICIO Y PRESTACION DEL SERVICIO.

Es decir, ¿si la empresa no estaba facultada para proveer materiales de construcción, porque se realizaron estas autorizaciones? Con base en este interrogante existiría un incumplimiento en el llenado de requisitos contractuales y contablemente establecidos, pues los giros debían ser entregados directamente a los proveedores con la factura correspondiente y soportes necesarios, no se entiende cómo se aceptaron o evaluaron documentos posteriormente para suplirlos. Sumando a lo mencionado, los giros fueron aprobados por la interventoría con una simple cuenta de cobro, esto verificado en informe de fiducia de fecha 6 septiembre de 2019, donde se envían los soportes de cada orden de giro aprobada en su momento.

24

Hecho Décimo Segundo.- Cabe resaltar que para el corte del día 30 de junio de 2019, la fiduciaria reportaba en su extracto un saldo de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$287.779.352,38)** , dicho saldo ascendía al 6,3% del total del anticipo, es decir que para el momento se había entregado 93,7% por un valor de **CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/ CTE. (\$4.289.437.289)**

Hecho Décimo Tercero.- Por otra parte, en el oficio No. 20192100286672 entregado por el CONSORCIO SB de fecha del 8 agosto de 2019, la interventoría manifiesta lo siguiente: *"Si bien en el giro 1 y 2 se realizaron soportados en ítems que en la actualidad están en evaluación para una posible adición como es la cubierta, las actividades hidrosanitarias y eléctricas de acuerdo con el nuevo alcance, después del 25 de julio de 2019 con la aprobación de las actividades no previstos, el contratista invirtió esos recursos en actividades como anclajes, estructura metálica excavaciones, demoliciones y demás ítems aprobados en el acta de no previstos No.1 pero es responsabilidad del contratista realizar el debido procedimiento para cambio de destinación de estos rubros. Procedimiento que a la fecha no se ha realizado con todos los soportes".*

Hecho Décimo Cuarto.- con fundamento en el anterior hecho, la interventoría entregó recursos del anticipo, adicional a que no se cumplió con el llenado de requisitos legales, sus autorizaciones de giro tampoco correspondieron a una programación de actividades de obra aprobadas y con base a un balance del proyecto aterrizado, el cual debía

desarrollarse posterior a la aprobación de la licencia de construcción del proyecto por la curaduría No. 5, pues como en su escrito lo menciona, con la adición y solo con la adición aprobada sería posible ejecutar en la obra actividades de cubierta, hidráulicas y/o eléctricas, pues si bien es cierto dentro del presupuesto contractual dichos ítems se encuentran contenidos, posterior a desarrollar la revisión de estudios y diseños del contrato, era conocido que los recursos otorgados no eran suficientes para dichas actividades.

Hecho Décimo Quinto.- Otro hecho irregular por parte de la interventoría se constituyó cuando de manera preliminar a la aprobación de la licencia de construcción (aprobada el 24 de diciembre de 2018), se aprobaron giros por un monto de **MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SESISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.508.637.838)** y de dicho monto la suma de **MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.145.614.533)**, se entregaron a la empresa **TRANINGCO** tal y como aparece en la siguiente tabla:

No. Giro	Valor	Fecha de solicitud	Fecha de desembolso	Beneficiario	Soportes de Giro	Rubro
1	\$ 363,023,305.00	lunes, 22 de enero de 2018	jueves, 25 de enero de 2018	Inversiones Grandes proyectos de construcción SAS	Cuenta de cobro No. 001 a favor de Inversiones Grandes proyectos de construcción SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
	\$ 382,666,641.00			Traningco SAS	Cuenta de cobro No. 001 a favor de Traningco SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
2	\$ 200,000,000.00	miércoles, 21 de noviembre de 2018	miércoles, 5 de diciembre de 2018	Traningco SAS	Cuenta de cobro No. 002 a favor de Traningco SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
	\$ 286,157,892.00			Traningco SAS	Cuenta de cobro No. 003 a favor de Traningco SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
3	\$ 143,060,000.00	lunes, 17 de diciembre de 2018	viernes, 21 de diciembre de 2018	Traningco SAS	Cuenta de cobro No. 004 a favor de Traningco SAS	MANO DE OBRA
4	\$ 133,730,000.00			Traningco SAS	Cuenta de cobro No. 005 a favor de Traningco SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

Hecho Décimo Sexto. - La interventoría CONSORCIO SB al entregar recursos sin conocer el alcance presupuestal del contrato y permitir el cambio de destinaciones de recursos de anticipo entregados, incumple en el control y vigilancia del anticipo, pues este no puede ser manejado como una caja menor para necesidades del proyecto, este debe corresponder a una programación de necesidades de obra conforme a un balance aterrizado del contrato y trasladado a un plan de inversión de anticipo. Pues solo de esta manera, la inversión de anticipo será correspondiente a la ejecución física del proyecto y permitirá el adecuado control y vigilancia del mismo, para el momento su inversión es ambigua para la Entidad Contratante Instituto Distrital de Recreación y Deporte — IDRD.

Hecho Décimo Séptimo. - Mediante comunicación Radicada con el número 20192100289022 con asunto "Solicitud de debido procedimiento para cambio de destinación de rubros de la inversión del Anticipo" de fecha del nueve (9) agosto de dos mil diecinueve (2019) el CONSORCIO SB, envía al contratista de obra la UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN documento donde indica lo siguiente:

"Es por ello que de presentarse la modificación del PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO aprobado por esta interventoría, se debe surtir el debido proceso de dicho cambio ante el CONSORCIO SB. lo cual hasta la presente no se ha formalizado por parte del ejecutor. Razón por la cual se le conminó a la entrega inmediata de la respectiva solicitud con sus soportes pertinentes. Para colegir, nuevamente se solicita se sustente la inversión del anticipo con todos los soportes pertinentes. los cuales deben estrictamente para los rubros específicos".

Hecho Décimo Octavo.- Del contenido del documento citado puede inferirse que la Interventoría CONSORCIO SB posterior a la entrega total del anticipo del contrato de obra, esto según Informe de Fiducia, había aprobado giros por un valor total de **CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$4.577.216.641)**; hacia presuntos proveedores de obra, pretendía que se modificara el plan de inversión o utilización del anticipo, entendiéndose que el plan de inversión es un medio financiero, administrativo y técnico, el cual permite a la Entidad y para este caso a la interventoría, identificar las actividades que permitirán la amortización del anticipo; asegurando de esta manera el buen manejo y la correcta inversión del mismo, pero para esta fecha y reiterando, ya se agotó la totalidad del anticipo y acogiéndonos a la lógica de la programación de entrega de anticipo, no tendría ninguna razón el modificar el plan de una inversión agotada en la compañía fideicomitente. Observándose adicionalmente que en el Informe Mensual de Supervisión julio de 2019 informa una ejecución de obra de unos doce puntos ochenta y tres por ciento (12,83%) y una precaria amortización del anticipo frente a este gran total entregado de **SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$603.875.279)**.

26

Hecho Décimo Noveno. - Como se ha venido evidenciando la interventoría, Consorcio SB, en los informes que presentó a los requerimientos realizados por el IDR, nunca pudo justificar la correcta inversión del anticipo, ni los pagos realizados a TRANINGCO, a AC. INGENIERIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. por más de 200 Millones de pesos, pues la supervisión del contrato por parte del IDR, hizo la observación que no eran veraces, completos ni oportunos lo que constituyó un presunto incumplimiento a su labor de control, reporte y vigilancia del manejo de los dineros entregados al Contratista, Unión Temporal San Antonio IDR Reforzamiento Asemain.

3.6.2 HECHOS CORRESPONDIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE PATOLOGÍA E INTERVENTORIA PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL INMUEBLE DENOMINADO – UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS).

Como consecuencia de los incumplimientos antes señalados por parte de la interventoría (CONSORCIO SB), valga decir, por su falta de seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento del contrato de obra No. 2937-2017; el IDR se vio en la necesidad de contratar un estudio de patología estructural, análisis de calidad y funcionalidad de las obras, y la presentación de una propuesta de intervención para la puesta en funcionamiento de la Unidad Deportiva el Salitre (UDS), con el fin de poder determinar el estado de la edificación objeto del contrato bajo su interventoría, y por ende de las obras no concluidas por el contratista principal UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMINETO ASEMAIN.

La justificación de la necesidad antes descrita resultó en la suscripción del contrato No. **2638-2021**, por la suma de **SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS (\$737.326.414.00)**, celebrado entre el IDR y la firma CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S, identificado con NIT No. 900.171.000-8.

A su vez con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista principal (contrato 2638-2021) y ante la necesidad de contar una vigilancia *especializada* dadas las condiciones técnicas del contrato de patología; el IDR celebró además el **contrato de interventoría No. 2722 de 2021**, por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$259.046.367.00)**, M/cte., cuyo objeto consistió: *“Realizar la interventoría Técnica, Administrativa, contable, financiera y Jurídica al Contrato derivado del proceso de selección por el concurso de méritos y cuyo objeto fue “Realizar el estudio de patología estructural, el análisis de calidad y funcionalidad de las obras y presentar la propuesta de intervención para la puesta en funcionamiento de la Unidad Deportiva el Salitre (UDS) Cod IDR 12-091 en Bogotá D.C.”*

3.7 HECHOS QUE PRECISAN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2999-2017

El contrato de interventoría 2999 de 2017, terminó según Acta de Terminación, fechada 5 de abril de 2020, el contrato de interventoría termino el día 5 de abril de 2020 (documento que se aporta con la subsanación de la demanda). (Lo subrayado es nuestro)

27

3.8 HECHOS QUE PRECISAN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 2937-2017

Como ha quedado establecido en los hechos narrados, el contrato 2937-2017 terminó el 5 de marzo de 2020, según informe de interventoría Santa Paula 008, presentado el 8 junio del año 2020, tal y como se aprecia en el siguiente recuadro, tomado del informe citado:

CONSORCIO SANTA PAULA 008	INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRATO IDR 2937 de 2017 – UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN		
	Fecha de emisión: 08/06/2020	FECHA: MARZO DEL 2020	V4
Fecha de terminación del Contrato:	Cinco (5) de marzo de 2020		

Igualmente, el Consorcio Santa Paula 008 mediante oficio número **IDRD-CES2999-2023-401**, **hace unas aclaraciones al IDR, entre ellas confirma la terminación del contrato y por qué no se levantó acta de terminación del contrato 2937-2017.**

“NUMERAL 6 DE LA LISTA DE CHEQUEO PARA LIQUIDACIÓN

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

En lo referente a la suscripción del acta de terminación se realizan las siguientes aclaraciones:

Con el ánimo de actualizar las garantías del contrato 2937 de 2017 en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se requirió a la UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN la suscripción del acta de reinicio No. 4 del contrato en mención, de forma tal que se proyectó el documento y se remitió vía correo electrónico con el comunicado IDRD-CES2999-2020-000341 el pasado 13 de julio de 2020, sin que a la fecha se recibiera respuesta alguna por parte del contratista de obra.

Sobre el particular, es pertinente mencionar que como quiera que se realizó la gestión para la suscripción del acta de reinicio No. 4 del contrato No. 2937 de 2017 sin que se lograra dicho fin, se remitió copia de lo correspondiente a la aseguradora y con dicho soporte se actualizaron las pólizas, como es de conocimiento de la entidad.

Teniendo en cuenta la imposibilidad de suscribir el acta de reinicio, y ante la negativa de respuesta por parte del contratista de obra tampoco fue posible suscribir un acta de terminación del contrato 2937 de 2017.

Ahora bien, acuerdo con el acta de suspensión No. 4 y la ampliación a la suspensión No. 4, se establece taxativamente la voluntad de las partes de reiniciar el contrato el día 04 de marzo de 2020, como quedó plasmado en esa acta en la página 2/3, la cual se muestra a continuación:

En Bogotá D.C. ; a los

DIECINUEVE

19

días del mes de

FEBRERO

de

2020

se reunieron:

RAFAEL PALACIO DORADO

actuando en representación del

Contratista

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

actuando en representación del

Interventor

con el fin de

AMPLIAR LA SUSPENSION

el contrato en mención por los motivos expuestos en este documento, así:

FECHA DE SUSPENSION Y/O AMPLIACION:

19

DE

FEBRERO

DE

2020

FECHA DE REINICIO:

4

DE

MARZO

DE

2020

28

En ese sentido, la nueva fecha de terminación del contrato se estableció por las partes para el 5 de marzo de 2020:

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO:

DIECISIETE (17) MESES QUINCE (15) DIAS

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: (aplica a contratos de indemnidad)

N/A

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO:

5

DE

MARZO

DE

2020

VALORES FINALES ACTUALIZADOS

Al respecto, se evidencia que la fecha de terminación del contrato de obra 2937 de 2017, se estableció para el 05 de marzo de 2020, fecha en la cual culminó el plazo contractual, posteriormente el 06 de marzo de 2020 el Instituto Distrital de

Recreación y Deporte – IDRD, tomó posesión del predio”.

Con esta aclaración se adjunta alcance al informe de interventoría en el cual se puede corroborar lo aquí afirmado.

IV. PRETENSIONES

Se dejarán, con ocasión a los hechos ya mencionados y las correcciones solicitadas por el Despacho las siguientes pretensiones principales:

PRIMERA. – SE CONDENE A LA UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN Y AL CONSORCIO SB de forma solidaria a pagar la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/cte. (\$996.372.781.00)**, debido a los incumplimientos declarados a **LA UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN**, (contratista principal 2937-2017) y al **CONSORCIO SB**.

Lo anterior corresponde a los perjuicios ocasionados al IDRD y materializados con las suscripción y ejecución del contrato 2937-2017 y que corresponden a la patología contratada para determinar el estado de la edificación de la Unidad Deportiva el Salitre Contrato No. 2638-2021, por la suma de **SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS (\$737.326.414.00) M/te y**

Así como a la ejecución y suscripción del contrato de interventoría **No. 2722 de 2021**, por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$259.046.367.00) M/cte.,**

Se solicita que se realice de manera solidaria ya que si bien, se incumplió al contratista principal, no lo es menos que estos perjuicios no fueron tasados en el incumplimiento ya que ocurrieron luego del inició de este proceso y que como se prueba con las documentales aportadas con esta demanda se dan también con ocasión a la falta del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la interventoría **CONSORCIO SB**, que obligó al IDRD a suscribir nuevos contratos para poder establecer un diagnóstico del estado de la Unidad Deportiva el Salitre.

SEGUNDA. - Que se liquide judicialmente el contrato 2937 de 2017 suscrito con **UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN**, teniendo en cuenta los perjuicios mencionados y los que se llegaren a evidenciar y probar dentro del marco del presente proceso.

TERCERA. - Condene de manera solidaria a la **UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN Y AL CONSORCIO SB**, por los demás perjuicios que se logren probar en el transcurso del proceso hasta su culminación.

CUARTA. - Que se condene al pago de intereses moratorios sobre el monto de las sumas de dinero reclamadas en la presente demanda.

QUINTA. - Que se condene a las demandadas al pago de las costas y agencias en derecho que se causen en el presente proceso.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Con fundamento en el contrato de obra 2937 de 2017 la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento ASEMAIN, a raíz de su incumplimiento transgredió la siguiente normatividad:

Artículo 3° de la Ley 80 de 1993 el cual dice lo siguiente:

“ARTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”

En este sentido la Corte Constitucional, mediante sentencia 499 de 2015 ha manifestado lo siguiente.

30

“En un Estado Social y Democrático de Derecho la contratación estatal, en tanto modalidad de la gestión pública, está regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad, previstos en el artículo 209 de la Constitución. En la contratación estatal está comprometido el interés general, ya que el contrato estatal es un instrumento para cumplir las finalidades del Estado, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios públicos, con la colaboración de los particulares. Por ello, la entidad estatal debe cumplir con los antedichos principios y garantizar que los contratistas también los cumplan, tanto en planeación como en la celebración y ejecución del contrato estatal”

En la misma línea jurisprudencial, la sentencia 713 de la Corte Constitucional dijo lo siguiente:

“El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. De hecho, la contratación del Estado es una de las formas de actuación pública de mayor utilización, pues muchos sostienen que el contrato estatal surge con la propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste asume la

responsabilidad de prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa de los derechos de los administrados y, por ese hecho, aumenta la complejidad de las tareas a su cargo, necesita del apoyo, la intervención y la experiencia que aportan los particulares”.

La Unión Temporal San Antonio reforzamiento IDR Asemain, incumplió el mandato legal establecido en el artículo 5° numeral 2° de la Ley 80 de 1993, el cual reza de la siguiente manera:

“Art.5 De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas:

(...)

Numeral 2° Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramamiento que pudieran presentarse”.

Para el caso que nos convoca la falta de colaboración resulta por parte del contratista en la falta de voluntad y seriedad en el cumplimiento del objeto contractual, así como en el cumplimiento de las obligaciones pactadas, no cumplió con el plazo pactado en la cláusula quinta del contrato 2937 de 2017, el cual establecía:

“Cláusula Quinta: Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución se estableció en trece (13) meses, los cuales se contaron a partir de la aprobación de la garantía única y suscripción del acta de Inicio; el plazo se discriminaba de la siguiente manera:

- *Periodo de coordinación quince (15) días*
- *Periodo de trámite de licencias dos y medio (2.5) meses*
- *Periodo de construcción diez (10) meses*

No obstante lo anterior este plazo fue modificado mediante la suscripción de las Modificaciones 1 y 3 así como por las suspensiones 1, 2, 3, y 4 junto con las correspondientes ampliaciones ocurridas durante el desarrollo del contrato, que dando como fecha de terminación del contrato el día cinco (5) de marzo de 2020, fecha que no fue cumplida por el contratista en razón a que no entregó los productos establecidos en el periodo acordado para la construcción dentro del plazo pactado y si en el momento en que la interventoría levanto su informe el 21 de junio de 2020 (Radicado IDR No. 20202100123622) presentaba un avance de obra físico de 38.80% y uno de NO ejecución del 61.20% para el momento en que finalizo el contrato, es decir 5 de marzo de 2020.

Fue tal su falta de colaboración para terminar el contrato que un día antes de terminar el contrato, es decir el 4 de marzo de 2020, el contratista y Seguros la Equidad, como compañía garante, solicitaron la suspensión de la obra (No. 4) con el fin de conseguir apoyo financiero por parte de la aseguradora.

Posteriormente se solicitó por los mismos motivos la ampliación 1 a la suspensión No. 4 con fecha 19 de febrero de 2020, de lo cual tanto la interventoría como por parte del IDRD, no dieron respuesta positiva, lo que conllevó posteriormente a la terminación del contrato el día 5 de marzo de 2020.

El contratista desconoció el artículo 1603 del Código Civil Colombiano, en el sentido de que *“los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solamente a lo que en ellos se expresa, sino a todas cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por naturaleza pertenecen a ella”*.

En tal sentido la buena fe como generadora y cumplidora de obligaciones por parte de quienes se comprometen al cumplimiento de las mismas no solo por la suscripción del contrato en sí, sino el asumir la responsabilidad de ejecutar un contrato en atención a lo establecido en el pliego de condiciones sino en los aspectos técnicos, genera que el contratista asuma con entereza y mucha responsabilidad el compromiso adquirido y lo cumpla dentro del plazo establecido, pactado en el contrato, a menos que se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, este último con las excepciones que se presenten a la regla, es por ello que se debe aplicar la buena fe in contrahendo como generadora de deberes de conducta ante el contrato suscrito con una entidad del Estado.

El doctor, Vladimir Monsalve Caballero, al analizar la buena fe como fundamento de los deberes precontractuales de conducta, Barranquilla, Revista Scielo, julio/diciembre de 2008, al analizar este principio, señala lo siguiente:

IMPORTANCIA DE LA BUENA FE IN CONTRAHENDO EN EL PROCESO DE FORMACION CONTRACTUAL

32

“La admisión de este principio no supone introducir moldes acabados que puedan fácilmente formular esquemas normativos de validez general sino líneas, directrices de la conducta social que deben ser ajustadas a cada caso, eso sí, sustentada en un principio universal del cual se ha venido hablando, que impone a las partes que negocian un arquetipo de conducta social, de lealtad y de fidelidad.

Debe existir la buena fe como una norma social y como una expresión de exigencia social insuprimible, originándose necesariamente de la coexistencia y armonía con la libre y autónoma actividad de todos los negociantes. Se observa que el principio de la buena fe viene, en definitiva, a constituirse en uno de los límites impuestos por el ordenamiento a la explicación de la autonomía privada. Existe entonces no una libertad indiscriminada sino que la libertad debe estar inspirada en el principio de la buena fe Es por tanto una norma jurídica que obliga a todo sujeto a que actúa en el tráfico a un deber objetivo de fidelidad y crédito, y constituye en el ordenamiento, un concepto abierto que permite concretar los deberes de conducta de los contratantes durante la celebración y el desarrollo del contrato.

De igual forma, la buena fe es compatible con las exigencias de la convivencia y de la solidaridad social, si tratamos de profundizar en estas exigencias de la convivencia, encontramos que se presentan bajo un doble aspecto cuya naturaleza puede imponer obligaciones positivas y negativas, como bien lo señala Betti:

"Las cuales se deben distinguir claramente: a) bajo un aspecto puramente negativo: aspecto que se halla esculpido en la máxima romana del "Alterum non laedere" y que lleva a exigir un comportamiento de respeto, de conservación de la esfera del interés ajeno. b) Bajo un aspecto positivo, que impone, no simplemente una conducta negativa de respeto sino una activa de colaboración con los demás, encaminadas a promover su interés".

En este sentido se desarrollan los deberes y derechos que se le imponen a las partes cuando están en negociaciones; por una parte, absteniendo de ejecutar actos que dañen o perjudiquen a su contraparte, y a su vez ejercitando todos aquellos actos necesarios para la satisfacción de sus mutuas necesidades, lo que nos lleva a concluir que tanto en el ejercicio de sus intereses legítimamente protegidos, las partes deben actuar de conformidad con la buena fe in contrahendo.

La Buena Fe in contrahendo como generadora de los deberes de conducta

"En general los ordenamientos civiles napoleónicos ofrecen un criterio elástico de valoración de conducta de un sujeto; esto significa que es necesaria la referencia a un momento prejurídico como índice de mediación de las actuaciones de las partes en las negociaciones. Como, en efecto, la buena fe, mentalmente exige la honestidad, la transparencia, la coherencia y rectitud en la conciencia y la fe en la palabra dada, a dictorum conventunque constancia ac veritas (tal era el significado originario de la buena fe romana, que designaba a la persona prudente y diligente, completamente determinada en el cumplimiento de la expectativa del otro). Esta lealtad exigible impone normalmente obligaciones de carácter negativo, y la buena fe impone obligaciones de carácter positivo. De todos modos debe tenerse presente, desde ahora, que el criterio de la corrección o de la lealtad se identifican con el criterio de la buena fe; por tanto, se habla de respeto a las relaciones de obligación, como criterio de conducta que deudor y acreedor deben observar en sus relaciones recíprocas, y que deben comenzar a observar desde un principio en la fase de las negociaciones, como ya se había dicho, en la medida que éstas deben conducirse de conformidad con las reglas de la buena fe y la lealtad.

Antes de entrar a estudiar los deberes genéricos o secundarios de conducta a los cuales se ha venido haciendo relación, es imprescindible clarificar que existe un deber básico y a juicio propio el más importante que le incumbe a las partes: es el deber de lealtad, ese concepto general cimentado en el deber moral o ético de actuar en forma leal frente al otro sujeto de derecho con quien nos encontramos en una relación de confianza.

La confianza es el soporte de cualquier vínculo obligacional que pueda regir las conductas humanas; desde los inicios de las mismas negociaciones de conformidad con el tráfico normal, las partes interactúan y comienzan a cimentar las bases de un futuro acuerdo basado en los actuares leales y correctos, y justo en ese estado de la negociación en la cual las partes se entregan confiadamente a la concreción de unas expectativas legítimas que se puedan tener, en ese

mismo instante se justifica en todo la imposición del deber de lealtad. Recuérdese que se contrata es con quien se confía, por tanto, sin duda es el principio nuclear del derecho de las obligaciones contractuales.

Este deber de lealtad, emprende para las partes un actuar de cooperación permanente y constante, tomando siempre en cuenta las expectativas legítimas de la contraparte, ello incluso puede representar el deber de una parte de comportarse de tal forma que se logren los objetivos a los que sabemos aspira la otra parte. Este tipo de relación no basta con actuar conforme a derecho o no ejercer conductas fraudulentas, sino por el contrario emprender actuaciones positivas y negativas, con tal de satisfacer las necesidades que les incumben a las partes en unos intereses que en principio se presentan como antagónicos, terminarán siendo estos siempre armónicos.

En sentido muy general puede decirse que, en todo momento del iter contractual, las partes que intervienen en todas sus fases están obligadas a conducirse con aquella diligencia y consideración de protección de interés mutuos, y por tanto esto le permite confiar a las partes que según la buena fe su contraparte actué de la misma forma como ella lo ha venido haciendo y por tanto ésta diligencia debe acompañar no sólo la etapa de formación sino la de ejecución y cumplimiento contractual.

La doctrina moderna sustenta que los deberes precontractuales encuentran su fuente en la relación (en el contacto social) que nace entre las partes con el fin de preparar el contenido del futuro contrato. De tal forma que hoy la literatura jurídica germánica habla que todo se resume al significado de una ecuación: Relación precontractual = relación de confianza. La relevancia de la confianza como elemento esencial no solo del periodo de formación negocial, sino de todo el proceso contractual, está orientada en el propio concepto de la buena fe objetiva reconocida expresamente como norma dirigida a la tutela de confianza y la lealtad en correlación al otro, con quien primero se entra en relaciones negociales.

Dicha percepción jurídica que en la ley ha hallado solamente expresión en algunas disposiciones particulares (art. 1337 del Código, art. 227 del código civil portugués, art. 197 del código civil griego y el párrafo del BGB 311.2.), ha sido desarrollada por la doctrina y la jurisprudencia en un instituto de derecho vigente que actualmente tiene fuerza de norma consuetudinaria a consecuencia de su ejercicio durante muchos años y de su acogida en la conciencia jurídica general. Además, es importante anotar que, dentro de los modernos movimientos de armonización y unificación del derecho privado como una de las perspectivas de las políticas de la Unión europea, existen en la actualidad todos unos marcos legales que pretenden la elaboración de un marco común de referencia, en el cual se reconoce expresamente que las partes en la etapa de negociación están sujetas al cumplimiento de unos deberes precontractuales que tienen su fundamento en la buena fe contractual.

Esta conciencia jurídica general es reconocida por Asúa González, quien afirma que las bases teóricas, de estos deberes fueron sentadas y consolidadas durante las décadas de los años veinte y treinta son las que aportan los conceptos

fundamentales a los que hoy todavía se recurre. De este modo, la existencia de deberes precontractuales que derivan de una relación vinculante de carácter legal, surgida de las conversaciones y cuya vulneración se sanciona, ha venido siendo, y lo es actualmente, un lugar común de la doctrina y la jurisprudencia, reconociéndose a este principio el carácter de costumbre jurídica.

De la buena fe nace un modelo de comportamiento no formulado legalmente y de imposible formulación legal, que vive en las creencias y en la conciencia social y al que deben ajustarse los comportamientos individuales. En este sentido se podría hablar de deberes de conducta del hombre en el prólogo negocial susceptibles de generar una responsabilidad precontractual, la cual tiene su fundamento en el concepto de fe in contrahendo, aquella que tiene su fundamento en el concepto general de la buena fe objetiva, pero aquella que es exigible única y exclusivamente a las partes cuando entra en negociaciones, y se origina por el contacto social. En la fase de negociaciones, las partes tienen la obligación de cumplir con los deberes secundarios de conducta, y es evidente que la violación de estas obligaciones es fuente de responsabilidad independientemente del acto ulterior de un acuerdo.

Por lo general, al no proceder estos deberes de una voluntad expresa o tácita y venir exclusivamente justificados por la teoría general de obligaciones y contratos, y en particular por la buena fe, constituyen únicamente unos deberes de conducta (en la medida exigida por la buena fe), derivada de las nociones vecinas de los vicios ocultos, evicción o incluso, los vicios de la voluntad. Sin embargo, esta afirmación puede a veces ser desacertada, pues muchas veces se nos presenta como una verdadera obligación; por tanto, considero que es pertinente entrar a clarificar las diferencias que existen entre los deberes naturales y jurídicos.

Pero antes es necesario recapitular afirmando que, en la actualidad, estos deberes de conducta, que otrora estuvieron en entredicho, hoy por hoy gozan del reconocimiento continental, y por ello es que, poco a poco, han ido adquiriendo su carácter de tipicidad en las diferentes leyes, en especial las que regulan el derecho de consumo. Su importancia y relevancia es tal, que todas las iniciativas académicas que se han desarrollado dentro de los procesos de unificación y uniformidad del derecho europeo de los contratos y del ordenamiento civil, las han consagrado, reconociendo su origen en la buena fe contractual, lo cual sin duda da fin al debate suscitado especialmente entre la escuela aquiliana que desconocía la existencia de estos deberes como unos deberes específicos que llegan a la esfera negocial cuando las partes comienzan las negociaciones".

El profesor Adrián Schopf Olea* Profesor de Derecho Civil, Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad de Chile. Doctor en Derecho, Universidad de München, al analizar La Buena Fe Contractual Como Norma Jurídica, en un artículo publicado en la Revista Chilena de derecho Privado, Santiago de Chile, diciembre de 2018, analiza lo siguiente:

"II. El contenido sustantivo de la buena fe contractual

1. La buena fe como remisión al estándar del contratante leal y honesto

En la doctrina tanto nacional como comparada la buena fe contractual es, en general, calificada como un concepto jurídico indeterminado, cuyo exacto contenido no se deja definir con precisión de una manera general y abstracta, que satisfaga condiciones necesarias y suficientes de aplicación. De modo análogo a como sucede con todo concepto jurídico indeterminado, las dificultades asociadas a su precisión no significan, sin embargo, que la buena fe constituya un concepto jurídico vacío, carente de todo contenido semántico, que resulte compatible con cualquier tipo de consideración. La particularidad de todo concepto jurídico indeterminado como el de la buena fe contractual es, en realidad, que su aplicación no puede efectuarse de una manera meramente mecánica, sino que presupone siempre un acto de evaluación y valoración del juez en cada caso particular, efectuado sobre la base de un conjunto de directivas a que ese mismo concepto remite, y que lo dotan de un contenido relativamente preciso en un contexto concreto. Los conceptos jurídicos indeterminados tienen, en este sentido, un significado jurídico relativamente preciso, en la medida que indican cuales son las directivas y consideraciones que resultan pertinentes en sus diferentes presupuestos de aplicación, permitiendo, de este modo, su concreción en cada caso y contexto particular. De modo análogo a como sucede con los restantes conceptos jurídicos indeterminados, los casos particulares en que la buena fe es concretizada en un deber de conducta o efecto jurídico específico tienen la virtud de dotarla sucesivamente de un contenido delimitado, de manera tal que el respectivo marco jurídico y la suma de esos casos y contextos particulares resultan determinantes para los efectos de poner al descubierto su sentido y alcance.

36

A la luz de ese trasfondo, la buena fe puede ser concebida como un principio general del derecho privado, que remite a un conjunto de directivas que no han sido expresadas en el acuerdo contractual, relativas a la lealtad, honestidad y consideración recíproca que las partes contratantes pueden razonablemente esperar en su comportamiento mutuo, en atención a la especial relación que se ha formado entre ellas en virtud del contrato. El cumplimiento de ese conjunto de directivas presupone satisfacer un específico estándar de conducta, de manera tal que, a través del establecimiento de la buena fe contractual como elemento constitutivo de la relación obligatoria, el derecho impone la observancia de un determinado estándar de comportamiento que debe ser cumplido por las partes contratantes durante todo el desarrollo de la relación contractual, desde su más básica gestación hasta su completa y total disolución. Ese estándar de conducta es el estándar del contratante leal y honesto, el que esencialmente implica honrar la confianza que supone la especial relación de intercambio y cooperación que subyace al contrato, de modo de no comportarse abusivamente y no defraudar las legítimas expectativas de comportamiento de la parte contraria, en atención a la finalidad económica o el propósito práctico que subyace a la convención.

Los tribunales superiores de justicia chilenos han dado a la buena fe contractual un alcance general análogo al referido, resolviendo reiteradamente que esta invoca “el modo sincero y razonable con que se procede, razón por la cual está íntimamente relacionada con la idea de rectitud, de intención y de lealtad”,

exigiendo a los contratantes “el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas”; que “es un estándar de conducta, que al darle contenido es empleado como sinónimo de probidad, lealtad, confianza, seguridad, honorabilidad” y que “se traduce en un comportamiento honesto, leal y veraz”.

La principal particularidad del estándar del contratante leal y honesto al que remite la buena fe contractual es que este implica comportarse de un modo que no solo considera los propios intereses, sino que, también, los de la parte contraria, lo que en esencia supone morigerar el principio en cuya virtud a cada contratante corresponde cautelar sus propios intereses en los distintos momentos de la relación contractual. El contrato es conocidamente el medio o instrumento que el derecho privado pone a disposición de las personas particulares para alcanzar sus propios fines, organizar sus intereses y, de esta manera, dar forma jurídica a sus relaciones recíprocas de intercambio y cooperación en el marco de una economía de mercado, caracterizada por la existencia de decisiones que son adoptadas descentralizadamente por los diferentes agentes del mercado. En su concepción más elemental, el contrato es concebido como un encuentro de intereses contrapuestos, en que cada parte atiende exclusivamente la realización de sus propios fines e intereses, sin ninguna consideración a los de la parte contraria. De conformidad a esa doctrina individualista del contrato, que en el Common Law se expresa en la regla caveat emptor, a cada parte contratante corresponde cautelar sus propios fines e intereses tanto en la negociación como en la determinación del contenido y ejecución del acuerdo contractual. Si bien esa concepción constituye el presupuesto o punto de partida fundamental de la doctrina del contrato en el derecho contemporáneo, la misma es complementada por consideraciones que limitan las conductas que pueden tenerse por legítimas en la consecución de los propios fines e intereses, lo que supone que en un cierto punto las partes de un contrato deben considerar no solo sus propios intereses, sino que, también, los de la parte contraria en el desarrollo de la relación contractual, todo lo cual tiene su reconocimiento más generalizado en la buena fe contractual. En este sentido, la buena fe da cuenta que el contrato no solo supone una relación constituida sobre la base de un encuentro de intereses y fines divergentes, donde a cada parte corresponde cautelar sus propios intereses, sino que es, también, expresivo de una relación de cooperación, que en cierta medida supone considerar también los legítimos intereses de la parte contraria para los efectos de satisfacer la finalidad económica o el propósito práctico que subyace a la convención. La radical individualidad y autonomía expresada en el principio de la autonomía de la voluntad (Código Civil, art. 1545) es complementada en este sentido por la cooperación y la confianza expresadas en el principio de la buena fe contractual (Código Civil, art. 1546), constituyendo ambos postulados los pilares más esenciales sobre los cuales se construye la institución del contrato en el derecho contemporáneo, la cual solo se deja entender adecuadamente a partir de una doctrina que integre tanto el principio de la autonomía privada como el principio de la buena fe contractual. Mientras la autonomía privada se refiere a los aspectos explícitamente acordados por las partes contratantes, el estándar del contratante leal y honesto se refiere a lo que no se encuentra expresado en el acuerdo contractual, pero constituye un presupuesto indispensable de realización del mismo, de manera tal que través de la buena fe contractual el derecho cautela los legítimos intereses de las partes contratantes más allá de su

explícito reconocimiento en la promesa contractual. El contenido del contrato en cuanto ordenamiento privado que regula las relaciones recíprocas de las partes contratantes se compone de ambos aspectos: lo expresamente acordado por las partes en virtud de la autonomía privada y lo implícitamente presupuesto en el mismo en virtud de la buena fe contractual.

2. La confianza como bien jurídico cautelado por la buena fe

El valor central que en último término subyace a la buena fe contractual en cuanto principio ordenador de la relación obligatoria es la confianza que implica la relación de intercambio y cooperación que subyace al contrato. No es de extrañar en ese sentido que el enorme desarrollo alcanzado en el último tiempo por la buena fe contractual, tanto en el derecho nacional como en el derecho comparado, tienda a coincidir con el creciente valor atribuido a la confianza en el desarrollo de relaciones económicas cada vez más complejas y sofisticadas que adoptan la forma de relaciones jurídicas de derecho privado.

En términos generales, la existencia y conservación de un determinado grado de confianza constituye un presupuesto indispensable para la organización y configuración de toda especie de relaciones sociales, siendo también una condición necesaria para el desarrollo de todas las formas de intercambio, cooperación y organización en general. En particular, la configuración de todo modo de relación y organización social sobre la base de un determinado grado de confianza recíproca ha sido resaltada como una particularidad de la tradición jurídica occidental, lo que explica que la protección de la confianza tenga un valor constitutivo no solo para el derecho privado, sino que, también, para el derecho en general. En ese sentido, tanto para el derecho privado como para el derecho público, la existencia de un acto que despierta cierto nivel de confianza y genera una legítima expectativa de comportamiento puede ser tenido por una razón suficiente para fundar una norma jurídica. Tanto la existencia del deber de negociar honesta y lealmente las condiciones de un contrato, como la existencia de la irrevocabilidad de un acto administrativo, pueden ser explicadas de este modo por referencia a la confianza despertada por determinados actos con significación jurídica, sea que se trate de un acto de derecho privado, como en el primer caso, o uno de derecho público, como en el segundo. En ambas hipótesis, lo determinante para la justificación de la respectiva norma jurídica no es, sin embargo, la circunstancia de que alguien efectivamente haya confiado en los actos respectivos, sino que esos actos tengan el sentido y significado de despertar un determinado nivel de confianza y, de este modo, fundar una legítima expectativa respecto de un determinado comportamiento o una cierta situación de relevancia jurídica. Lo determinante, por lo mismo, es un juicio que primariamente atiende al sentido y efectos que objetivamente produce el acto que genera la confianza, y no al sujeto que confía en el mismo.

En el ámbito general del derecho privado y, en especial, del derecho de contratos, la protección de la confianza no se agota en los intereses particulares y concretos de las partes contratantes, sino que tiene un valor constitutivo más general y abstracto, referido a la protección del tráfico jurídico en general, cuya materialización necesariamente presupone un determinado nivel de confianza entre los diferentes sujetos de derecho privado en sus respectivos tratos

recíprocos. El derecho de contratos, en cuanto instrumento dinámico de la economía que canaliza y permite la efectiva realización del comercio, presupone en este sentido un cierto nivel de confianza como condición indispensable de su materialización, cuya expresión más general en cuanto valor fundamental que subyace a la institución del contrato tienen precisamente lugar a través de la buena fe contractual. En su significación más originaria y elemental la buena fe expresa la sujeción a la palabra empeñada, en cuanto sentirse vinculado por la propia declaración en razón de la confianza creada en la parte contraria, de manera tal que esta última puede tener la legítima expectativa de que la palabra empeñada será observada y la promesa contractual cumplida. La existencia y protección de esa confianza constituye un presupuesto básico e indispensable para la realización de intercambios y el desarrollo del tráfico jurídico en general, sin la cual el comercio y gran parte de las relaciones económicas que se canalizan a través del contrato no resultan siquiera imaginables, de modo que junto a la autodeterminación individual en cuanto asunción voluntaria del deber contractual, la protección de la confianza y el tráfico jurídico pueden ser vistas como una razón adicional para fundamentar la obligatoriedad de la vinculación contractual. La autonomía privada en cuanto potestad de las partes contratantes para configurar sus relaciones recíprocas de conformidad al acuerdo alcanzado tiene en este sentido un necesario correlato y presupuesto de ejercicio en la confianza depositada en la contraparte del contrato, de modo que cuando mediante la buena fe contractual se protege la confianza y seguridad del tráfico jurídico, se protege, también, de manera indirecta y en último término, la posibilidad de una efectiva realización de la autodeterminación individual.

La circunstancia que el cumplimiento de la obligación contractual constituya la más básica expectativa de comportamiento de las partes contratantes tiene por consecuencia que la sola infracción del contrato constituya la más pura y elemental inobservancia a la buena fe contractual. La confianza expresada en la buena fe no se agota, sin embargo, en esa sola circunstancia, sino que comprende un conjunto o abanico mucho más amplio de expectativas implícitas respecto de lo que puede tenerse por el comportamiento exigible a las partes contratantes en sus tratos recíprocos con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato. La relación obligatoria surgida del contrato está caracterizada por una especial vinculación entre las partes contratantes orientada al intercambio y la cooperación, lo que conlleva una intensificación de la confianza depositada en la parte contraria, la que está por sobre el solo cumplimiento de las obligaciones voluntariamente asumidas y los demás acuerdos expresamente alcanzados, de manera tal que a los contratantes resulta exigible comportarse en todo momento y bajo todas las circunstancias relativas al contrato como un contratante leal y honesto para los efectos de satisfacer la finalidad económica o propósito práctico que subyace a la convención. En términos generales, esa exigencia implica, entre otras cosas, que el contrato debe ser siempre interpretado y ejecutado según su sentido y finalidad por sobre su mero tenor literal; que más allá de las obligaciones explícitamente contraídas por los contratantes, estas tienen deberes u obligaciones conexas orientadas a realizar todo lo razonablemente exigible para cumplir con la finalidad económica o propósito práctico que subyace al contrato, debiendo, a su vez, abstenerse de realizar todo aquello que impida o ponga en peligro la efectiva realización de esa finalidad económica o propósito práctico; que los derechos y facultades fundados en la relación contractual deben

ser siempre ejercidos de un modo leal y honesto que se condiga con su sentido y finalidad por sobre consideraciones puramente formales, de manera de evitar ejercicios abusivos, meramente oportunistas y por completo desconsiderados del interés de la parte contraria y que, en el extremo, la regla contractual puede ser, incluso, excepcionalmente corregida o modificada en atención a circunstancias por completo extraordinarias que atienden al efectivo cumplimiento de la finalidad económica o propósito práctico del contrato. No obstante sus diferencias específicas, todos esos efectos o consecuencias son siempre reconducibles a una legítima expectativa de comportamiento implícita respecto de la parte contraria, cuyo último fundamento se encuentra en la confianza que resulta inherente al contrato, y que es invocada como trasfondo de la buena fe contractual.

La enorme flexibilidad de la institución contractual, así como su idoneidad para capturar diferentes tipos de relaciones de intercambio y cooperación, se muestra en que la particular naturaleza de la relación económica o social que subyace a una determinada especie de contrato puede tener una incidencia directa y determinante en la intensidad de la confianza depositada en la parte contraria, así como en las legítimas expectativas de conducta asociadas a la misma, lo que determina la diferente relevancia que la buena fe puede tener en la configuración de las distintas relaciones contractuales. Lo expresado da cuenta del diferente peso que puede tener la buena fe en cuanto principio ordenador de una determinada relación contractual, en función de la naturaleza económica o las particularidades del negocio que subyacen a la convención. En este sentido, es mayor la honestidad y lealtad que se pueden esperar de la otra parte en un contrato esencialmente orientado a la cooperación, como la sociedad, el joint venture o el mandato, que en uno preferentemente orientado al intercambio, como la compraventa, la prestación de servicios o el arrendamiento de bienes. De igual modo, es también mayor la lealtad y voluntad de cooperación que puede esperarse de la otra parte en un contrato que ha perdurado largamente, como puede ser el caso en algunas hipótesis de suministro o distribución, que en un contrato que se ha ejecutado instantáneamente y de una sola vez, como lo compraventa de un bien ordinario o la prestación de un servicio esporádico. El criterio más relevante, sin embargo, para determinar la relevancia de la buena fe, en cuanto principio ordenador de la relación contractual, puede ser ante todo visto en la posición relativa de las partes contratantes, siendo decisivo el nivel de asimetría que pueda existir entre las mismas, sea por su fuerza económica o su respectivo nivel de sofisticación y especialidad en un determinado ámbito de actividad, todo lo cual condiciona la efectiva posibilidad de negociación y protección de los propios intereses por cada uno de los contratantes. De esta manera, en contratos estandarizados celebrados con consumidores, donde existen posiciones fuertemente asimétricas de poder que no pueden ser razonablemente remontadas, existe una mayor confianza respecto de que el contenido de la convención no contiene condiciones sorpresivas o particularmente desfavorables para quien no ha podido revisar y discutir sus términos, que en contratos largamente negociados entre partes sofisticadas, donde cada contratante ha podido cautelar sus propios intereses y negociar cláusulas precisas en su beneficio, de manera tal que la confianza depositada en que la contraparte contractual ha atendido tanto a los propios intereses como a los ajenos es mínima, estando el contrato mucho más fuertemente gobernado

por lo acordado por las partes contratantes en virtud del principio de libertad contractual, que por cualquier otra especie de consideración fundamentada en la buena fe contractual.

En definitiva, si bien a todo contrato resulta inherente un cierto grado de confianza, el que se refleja en un conjunto de expectativas de comportamiento implícitas que sobrepasan la promesa contractual expresamente convenida por las partes, resulta posible distinguir una serie de criterios específicos que permiten diferenciar y precisar la intensidad de la confianza que subyace a una determinada relación contractual. En todos los casos esa confianza, así como el conjunto de expectativas de comportamiento implícitas a que la misma da lugar, tienen siempre su reconocimiento y protección más general en el derecho privado a través de la buena fe contractual, en cuanto principio ordenador de la relación obligatoria surgida del acto convencional.

III. La forma jurídica de la buena fe contractual

1. La buena fe contractual como cláusula general

El art. 1546 del Código Civil, en cuanto disposición legal que recoge con alcance general la buena fe contractual, así como sus equivalentes en el derecho comparado, es usualmente calificado como una cláusula general. De esta manera, tanto la doctrina nacional como extranjera asumen, en general, que esa es la forma jurídica que adopta la norma legal que consagra la buena fe contractual.

41

La determinación de qué es exactamente lo que significa que una norma legal constituya una cláusula general es una cuestión altamente controvertida en la doctrina jurídica contemporánea, teniendo las cláusulas generales un estatus extraordinariamente difícil y poco claro en el derecho privado. Si bien resulta posible encontrar el término *clausula generalis* en el derecho romano, la discusión teórica acerca de la noción de cláusula general, así como los esfuerzos metodológicos orientados a la racionalización de su aplicación, son propios del derecho contemporáneo. En particular desde principios del siglo XX resulta posible observar un creciente interés por la precisión y modo de aplicación de las cláusulas generales, lo que en gran medida tiene su origen en el reconocimiento de la necesidad de incorporar mayor flexibilidad en la aplicación y desarrollo jurisprudencial del derecho privado, cuestión que contrasta radicalmente con la pretensión de completitud de la ley y el escepticismo propio de la codificación hacia la función judicial, donde las cláusulas generales eran mayoritariamente vistas como fuente de inseguridad jurídica y arbitrariedad judicial, al abrir significativos espacios de discreción en la aplicación del derecho. Las cláusulas generales constituyen en ese sentido una concesión o reconocimiento del legalismo jurídico a la necesidad de flexibilizar las facultades de los jueces en la aplicación y desenvolvimiento del derecho privado.

La relevancia que las cláusulas generales han tenido en el desarrollo más reciente del derecho privado, así como el lugar central que, por lo mismo, han alcanzado en la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos contemporáneos, ha llevado a que la discusión a su respecto haya alcanzado cada vez mayor

atención y relevancia, al punto de sostenerse que muchos de los principales problemas que la aplicación del derecho privado plantea a la ciencia jurídica convergen en la discusión en torno a las cláusulas generales, cuestión que vale especialmente para la disposición legal que consagra la buena fe contractual. Las principales preocupaciones doctrinarias en torno a las cláusulas generales se han concentrado en dos cuestiones por completo esenciales: en primer lugar, precisar las particularidades que definen las cláusulas generales, lo que supone avanzar hacia una noción más precisa de cláusula general y, en segundo lugar, racionalizar su aplicación y los espacios de discreción judicial a ellas asociadas, lo que supone responder la pregunta metodológica sobre la particular forma de concreción de las cláusulas generales en el proceso de interpretación y aplicación del derecho privado.

En lo relacionado con la noción misma de cláusula general, la formulación de normas legales que asumen esa forma jurídica puede ser ante todo vista y entendida como un específica técnica regulación del comportamiento caracterizada por situarse en el extremo contrario a una ordenación estrictamente casuística y fragmentada, cuya principal particularidad es regular un ámbito de actividad recurriendo a un catálogo detallado de normas jurídicas específicas que definen con un alto grado de detalle el supuesto de hecho que es condición de su aplicación, así como los específicos deberes de conducta y demás efectos jurídicos atribuidos a la efectiva realización del respectivo supuesto legal. En el extremo contrario, las cláusulas generales se caracterizan por definir su propio ámbito de aplicación de un modo extraordinariamente amplio, y por fijar de un modo relativamente indeterminado los deberes de comportamiento y demás efectos jurídicos asociados a la realización de la respectiva hipótesis legal. Si bien el legislador puede recurrir exclusivamente a uno u otro modelo regulativo, la ordenación del comportamiento con referencia a cláusulas generales o a reglas jurídicas más detalladas no constituyen métodos excluyentes, sino que, por el contrario, se trata técnicas de regulación del comportamiento que se complementan entre sí. Una formulación relativamente común, en que es observable esa complementación, se expresa en la introducción y definición de una cláusula general, la que es posteriormente desarrollada por reglas jurídicas más precisas que no tienen pretensión de exhaustividad, resultando, además, fundamentales para una adecuada interpretación de la respectiva cláusula general, en la medida que pueden ser concebidas como una concreción de la misma efectuada por el propio legislador.

Una vez asumido que las cláusulas generales son ante todo una técnica de regulación del comportamiento, a las mismas suelen atribuírseles ciertos elementos o rasgos distintivos, con lo que se pretende diferenciarlas de otras normas jurídicas. Las cláusulas generales son en ese sentido típicamente caracterizadas por su extraordinaria generalidad, su alto nivel de abstracción y por su significativo grado de indeterminación conceptual. Esa sola caracterización parece resultar, sin embargo, insuficiente, ya que tanto la generalidad, la abstracción y la indeterminación conceptual son, en realidad, características comunes que pueden atribuirse a la mayoría de las normas jurídicas que tiene su fuente en la ley. Todas las particularidades que suelen atribuirse a las cláusulas generales como rasgos distintivos de las mismas son

de esta manera comunes a todas las normas legales, de modo que una diferenciación sobre la sola base de esos criterios resulta insuficiente. Atendidas esas dificultades, el mayor grado de generalidad, abstracción e indeterminación conceptual de las cláusulas generales solo puede ser calificado como una particularidad que resulta posible concebir en relación con otras normas jurídicas, a su vez, caracterizadas por su mayor especialidad, grado de concreción y determinación conceptual, lo que supone un reconocimiento de que la diferenciación referida es esencialmente gradual. La calificación de una norma jurídica como cláusula general solo es de esta manera posible en el contexto o por referencia a una serie de reglas jurídicas constituidas de una manera más detallada o acotada, respecto de las cuáles la primera es elevada a un escalón superior, precisamente en razón de su mayor grado de generalidad, abstracción e indeterminación conceptual. En este orden de ideas, en relación con las demás normas legales que fijan los derechos, obligaciones y, en general, el contenido de los diferentes contratos, la disposición legal que consagra la buena fe contractual puede ser vista como una cláusula general, al resultar más general, abstracta e indeterminada conceptualmente que cada una de esas normas jurídicas particulares, muchas de las cuales pueden ser, a su vez, vistas como concreciones legales del estándar del contratante leal y honesto.

Si bien la caracterización de las cláusulas generales en atención a las particularidades señaladas contribuye a su definición, esas solas consideraciones resultan insuficientes para dar cuenta de su particular constitución. Aunque puede ser tenido por correcto que las cláusulas generales tienen un mayor grado de generalidad, abstracción e indeterminación conceptual que otras normas jurídicas, su verdadero rasgo distintivo puede ser visto esencialmente en que, a diferencia de la mayoría de las normas legales que configuran el derecho privado, las cláusulas generales no establecen con precisión los deberes de comportamiento y demás efectos jurídicos específicamente ordenados para cada una de las hipótesis de hecho comprendidas en su ámbito de aplicación, sino que, en su lugar, regulan el comportamiento por referencia a un estándar o modelo de conducta que solo indica las directivas de comportamiento que deben ser observadas en las innumerables hipótesis de hecho comprendidas en el ámbito de aplicación de la norma, el que, según ya se señaló, es definido de una manera extraordinariamente amplia. El deber de conducta que debe ser observado en cada una de las innumerables hipótesis de hecho cubiertas por el ámbito de aplicación de la cláusula general no se encuentra de esta manera especificado con precisión en la propia norma jurídica, sino que tiene que ser derivado de la misma a partir del respectivo estándar o modelo de conducta que forma parte de la cláusula general, lo que supone atender, por una parte, al conjunto de directivas y guías de conducta que dotan el referido estándar de conducta de contenido y, por la otra, a todas las circunstancias y particularidades de hecho que configuran el caso concreto. La así denominada concreción de la cláusula general implica de esta manera derivar de la misma un deber de conducta o efecto jurídico específico que regule la particular relación de derecho privado, llenando de este modo el espacio en la ley dejado abierto por el legislador al regular el comportamiento por medio de una cláusula general.

En el orden de ideas señalado, el art. 1546 del Código Civil, al disponer genéricamente el deber de las partes de actuar de buena fe, no establece cuál es la específica conducta que deben observar los contratantes en las múltiples hipótesis de hecho cubiertas por su ámbito de aplicación, limitándose por el contrario a establecer directivas o guías generales de conducta, en cuya virtud las partes de un contrato tienen el deber genérico de comportarse de acuerdo con el modelo o estándar de conducta del contratante leal y honesto durante todo el desarrollo y en todos los momentos de la relación contractual, lo que en esencia implica no comportarse abusivamente y no defraudar las legítimas expectativas de comportamiento de la parte contraria, considerando en un cierto punto no solo los propios intereses, sino que, también, los de la parte contraria, en atención a la finalidad económica y el sentido práctico de la específica relación contractual. La determinación de qué es lo que eso exactamente significa y cuáles son los específicos deberes de comportamiento y demás efectos jurídicos que de ello se siguen, es algo que necesariamente queda abierto y tiene que ser precisado en una fase o estadio posterior, sobre la base de hechos y circunstancias más precisas y acotadas, a la luz de las directivas y guías a las que remite el estándar del contratante leal y honesto, cuestión que supone, a su vez, atender a los valores y fines que subyacen a la institución del contrato. Si bien esa determinación puede ser efectuada tanto por el propio legislador como por los usos normativos, según se deduce de manera inequívoca del tenor literal del art. 1546 del Código Civil, se trata de una tarea judicial por excelencia, en atención a la enorme cantidad de hechos y circunstancias concretas que pueden incidir relevantemente en la relación contractual.

La cuestión se plantea en términos análogos en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, con ocasión de la aplicación de los arts. 2314 y 2329 inc. 1° del Código Civil, que consagran la más típica e indiscutida de las situaciones en las que el legislador regula el comportamiento por medio de una cláusula general. De acuerdo con esa disposición legal, la responsabilidad civil extracontractual solo puede configurarse bajo la condición de un comportamiento doloso o culpable, siendo la culpa o imprudencia el elemento decisivo en la configuración de la responsabilidad civil, en la medida que esta es esencialmente un derecho de accidentes. La culpa extracontractual presupone, a su vez, la infracción de un deber de comportamiento, remitiendo para los efectos de la determinación de ese deber al modelo o estándar de conducta del buen padre de familia, caracterizado por emplear el cuidado ordinario en la conducta susceptible de causar daños a otros en las interacciones espontáneas y no programadas entre particulares (Código Civil, art. 44 inc. 3° y 4°). La norma no define cuál es ese cuidado ordinario y cuáles son los específicos deberes de comportamiento que deben ser observados en las múltiples e innumerables hipótesis de hechos cubiertas por su ámbito de aplicación, limitándose por el contrario a señalar que en todas esas hipótesis debemos comportarnos de conformidad al estándar del buen padre de familia. La definición de los específicos deberes de conducta que deben ser observados en cada caso tienen necesariamente que derivarse del referido estándar o modelo de conducta, cuestión que solo puede efectuarse a partir de hechos más precisos y por referencia a las directivas de comportamiento a las que remite el estándar o modelo de conducta del buen padre de familia que subyace a la culpa, cuestión que supone considerar tanto los valores como los fines que subyacen a la

institución de la responsabilidad civil extracontractual. Esos valores y fines pueden ser identificados con la necesidad de protección de determinados bienes en intereses, por una parte, y necesidad de conservación de una amplia libertad de acción, por la otra. La definición precisa de los deberes de comportamiento cuya infracción constituye la culpa puede ser efectuada por el legislador o los usos normativos en el evento de supuestos más acotados, tratándose, sin embargo, de una típica tarea judicial, en atención a la enorme e incommensurable cantidad de conductas en que unos pueden lesionar o afectar los bienes e intereses de otros ocasionándoles un daño o perjuicio.

El art. 1546, por una parte, y los arts. 2314 y 2329 inc. 1°, por la otra, según se puede observar, tienen, de esta manera, la misma forma jurídica, diferenciándose esencialmente por su presupuesto de aplicación y por el contenido de los estándares o modelos de conducta que los integran, los que remiten a diferentes directivas de conducta, cuestión que, a su vez, está condicionada por los distintos valores y fines del contrato y la responsabilidad civil extracontractual en cuanto instituciones fundamentales del derecho privado.

En definitiva, una vez asumido que las cláusulas generales implican una técnica de regulación del comportamiento, su verdadero rasgo distintivo puede ser visto en que, por una parte, definen su supuesto de aplicación de un modo extraordinariamente amplio y, por la otra, no establecen deberes de comportamiento o efectos jurídicos precisamente definidos, sino que incorporan un concepto jurídico indeterminado -buena fe, culpa- que remite a un estándar o modelo de conducta, cuyo contenido se compone de determinadas directivas de conducta, las que se vinculan con los valores y fines que subyacen a la respectiva institución de derecho privado y del que se derivan los deberes de comportamiento o demás efectos jurídicos específicos que deben ser observados en cada caso particular regulado por la respectiva cláusula general. En el orden de ideas señalado, el art. 1546 del Código Civil, en cuanto disposición legal que consagra la buena fe contractual, contiene una fundamental cláusula general de derecho privado, probablemente la más relevante en el ámbito del derecho de contratos, solo equiparable en importancia y centralidad a los arts. 2314 y 2329 inc. 1° del Código Civil, que establecen la cláusula general más relevante en la configuración del derecho de la responsabilidad civil extracontractual. La cláusula general desarrollada sobre la base del art. 1546 tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todos los momentos de la relación contractual y, más aún, a todos los momentos de toda relación jurídica de derecho privado caracterizada por una especial vinculación entre las partes, en cuya virtud estas deben en todo momento de la referida relación actuar de buena fe, esto es, comportarse según el estándar o modelo del contratante leal y honesto, lo que solo expresa un conjunto de directivas generales de comportamiento, sin indicar la conducta específica que, en concreto, es exigida a cada parte frente a determinadas circunstancias de la relación obligatoria, todo lo cual solo puede ser precisado en una fase o estadio posterior, sobre la base de hechos más precisos y acotados, a la luz de las directivas, valores y fines a los que remite la buena fe contractual.

1. La vinculación del juez a la ley en la aplicación de la buena fe contractual

La buena fe constituye una norma jurídica positiva que forma parte del ordenamiento de derecho privado, que en razón de su contenido y particular forma jurídica no se deja aplicar mecánicamente mediante un simple juicio lógico o de subsunción, diseñado a partir de un entendimiento del derecho privado como un conjunto de reglas que definen con precisión el supuesto de hecho que es condición de su aplicación, así como las específicas consecuencias jurídicas atribuidas a la realización de la respectiva hipótesis legal. En consideración a la innumerable variedad, complejidad e imprevisibilidad de los hechos que pueden resultar relevantes para las relaciones jurídicas entre personas particulares, la aplicación del derecho privado no se limita prácticamente nunca a una figura lógica acabada y claramente delimitada que permita un juicio mecánico de subsunción, de manera tal que lo dicho puede ser, en realidad, tenido por válido respecto de la gran mayoría de las normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico de derecho privado.

El distanciamiento del ideal constituido por el juicio lógico de subsunción o de una aplicación meramente mecánica del derecho por los tribunales de justicia se muestra, sin embargo, con especial radicalidad en la concreción de la buena fe contractual, la que siempre presupone un especial acto de valoración y de evaluación por parte del juez, orientado precisamente a concretizar y determinar los específicos deberes de conducta y demás efectos jurídicos que se siguen de la aplicación del estándar del contratante leal y honesto a una específica relación contractual. A diferencia de otras normas legales que regulan el contenido de los contratos, la buena fe no indica los deberes de conducta específicos que las partes tienen la necesidad de observar, ni los otros efectos jurídicos que se pueden seguir de su aplicación, de modo que es el juez quien debe previamente precisar cuáles son esos deberes y demás efectos jurídicos, una vez verificados ciertos hechos y circunstancias particulares que resultan jurídicamente relevantes para la configuración de la relación contractual. Solo una vez efectuado lo anterior puede determinarse si esos deberes de conducta han sido o no cumplidos por las partes contratantes, y cuáles son los efectos jurídicos que se siguen de su eventual inobservancia. Esa circunstancia, esto es, que sea el juez quien tenga que previamente definir y precisar el contenido de los específicos deberes de conducta y demás efectos jurídicos que se siguen de la aplicación del estándar del contratante leal y honesto, es lo que distancia de manera tan significativa la aplicación de la buena fe contractual del ideal del juicio lógico de subsunción, siendo, además, la diferencia respecto de la gran mayoría de las restantes normas legales, en que es el propio legislador quien establece con relativo detalle el contenido de los respectivos deberes de conducta o efectos jurídicos ordenados para una específica hipótesis legal. En razón de esa significativa indeterminación y los espacios de discreción que ello implica, la principal dificultad que presupone la aplicación de la buena fe contractual a un caso particular se refiere a la sujeción del juez a la ley, habiéndose llegado a sostener que la buena fe contractual no supone en realidad vinculación alguna para los tribunales de justicia, encubriendo en verdad la creación judicial libre de normas jurídicas en el marco del derecho de contratos. La relación entre legislación y judicatura es de esta manera el problema más básico y fundamental que la aplicación de la buena fe contractual plantea en el derecho de contratos.

Aunque parezca una obviedad, resulta necesario recalcar que la premisa fundamental en la aplicación de la buena fe contractual a una determinada relación obligatoria solo puede ser la esencial vinculación del juez a la ley. La buena fe contractual es una cláusula general que forma parte del conjunto de normas jurídicas que conforman el derecho de contratos, de manera tal que se trata de una norma legal que -al igual que cualquier otra norma legal que satisface los respectivos criterios de validez- forma parte del derecho positivo, debiendo, por lo mismo, ser aplicada a un caso concreto de verificarse sus respectivas condiciones de aplicación. Una característica fundamental de toda cláusula general como la buena fe contractual es de hecho vista en la circunstancia de que se trata de una norma jurídica formulada en una disposición legal, la que debe ser aplicada al igual que cualquier otra disposición legislada que forma parte del derecho vigente. En este sentido, en la medida en que es el propio legislador quien opta por regular gran parte del contenido implícito de la relación contractual mediante una norma jurídica de esa especie en vez de establecer una catálogo de normas jurídicas más detalladas, de surgir un conflicto con ocasión de esa relación y verificarse la respectivas condiciones de aplicación, el juez debe necesariamente atender a lo ordenado por el legislador al introducir la respectiva cláusula general, lo que en esencia implica atender a las directivas y guías de conducta a las que remite la buena fe contractual, para derivar de las mismas el respectivo deber de conducta o efecto jurídico específico. La circunstancia de que la buena fe contractual se distancie de una aplicación meramente mecánica del derecho y suponga especiales espacios de discreción judicial no significa en ese sentido que, por esa sola razón, la jurisprudencia deje de ser una servidora de la ley en la resolución de los conflictos de relevancia jurídica vinculados a las relaciones contractuales donde resulta aplicable el estándar del contratante leal y honesto. En la aplicación de la buena fe contractual a un conflicto particular los tribunales de justicia deben, por lo mismo, sujetarse siempre a lo ordenando por el legislador”.

47

Concepto Sala de Consulta C.E. 811 de 1996 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, **Consejero Ponente: Roberto Suárez Franco, Santa Fe de Bogotá, D. C., diecisiete (17) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996).**

“La buena fe es un elemento de la vida de relación, pero no se incorpora al derecho tal cual se da en la realidad, sino que recibe una carga o un plus que resulta de unas precisiones técnicas necesarias. En el campo jurídico, el concepto de buena fe, aunque indeterminado en sus alcances, tiene un sustento real. No es creación del legislador, sino que este, partiendo de la realidad, adscribe a la buena fe ciertos contenidos y le impone determinadas limitaciones. Por ello, aun cuando creemos que puede hablarse de un principio general de buena fe, con su contenido más o menos uniforme en los diversos sistemas jurídicos, no podemos desconocer que en cada ordenamiento jurídico concreto se le asignan matices, que, sin afectar su esencia, modifican su aplicabilidad, su alcance y sus efectos. Tal es lo que ocurre, entre nosotros, con el concepto de buena fe cuya concepción jurídica anterior, que era de raigambre legal, ha pasado a ser un ordenamiento de carácter constitucional.

La clasificación tradicional de la buena fe distingue: 1) buena fe objetiva: la buena fe actúa como regla de conducta, portadora de normas en sí, o generadora de normas concretas; 2) Buena fe subjetiva: la buena fe consiste en la condición de

un sujeto en una situación jurídica dada, con referencia al conocimiento que tenga de las circunstancias generales de la misma. Dentro de esta categoría, y según las posturas asumidas, sobra hablar de que toda ocurrencia o ignorancia constituye buena fe, o de que sólo el error excusable genera una situación de buena fe; es decir, que sólo tiene buena fe el sujeto que actúa diligentemente.

Por último, y en consonancia con el pensamiento del autor Diez Picazo, la buena fe tiene una triple función: 1) Como causa de exclusión de la culpabilidad en un caso formalmente ilícito y por consiguiente como una causa de exoneración de la sanción o por lo menos de atenuación de la misma (parte el autor de la concepción que diferencia el ilícito objetivo y el subjetivo); 2) Como causa o fuente de creación de especiales deberes de conducta exigibles, en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes a través de ella. Corresponde a lo que tradicionalmente se denomina fuente de integración del contrato aunque es necesario advertir que con acierto no limita la función de integración a la relación jurídica nacida del contrato, sino que la considera eficaz frente a cualquier relación jurídica. Resulta importante destacar también los límites que señala para el juego de esta función, los que resultan de la naturaleza de la relación y de la finalidad tenida en cuenta por las partes; 3) Como una causa de limitación en el ejercicio de un derecho subjetivo o de cualquier otro poder jurídico.

2. Alcances de su aplicación.

El artículo 83 de la Constitución parte de un supuesto de carácter objetivo muy preciso: cuando en la vida nacional se cumplan actuaciones de los particulares o de las autoridades públicas todas estas personas deben ceñirse a "los postulados de la buena fe" con lo que se quiere significar que quienes así actúen deben acogerse a proposiciones "cuya verdad se admite sin pruebas y que es necesario para servir de base en ulteriores razonamientos". Realmente son supuestos que se establecen para fundar una demostración.

Tal normatividad consagra, en primer término, un deber para toda persona: ceñirse a los postulados de la buena fe; es un imperativo categórico que se proyecta en dos maneras: por los particulares cuando actúan frente al Estado, o por este cuando en ejercicio de la función pública, desarrolla su propia actividad frente a los particulares.

En tal orden de ideas es menester establecer diferenciación entre la idea abstracta y escueta de buena fe y el principio general del derecho que lo contempla. La buena fe a secas obedece a un concepto incluido en normas jurídicas tendientes a precisar supuestos de hecho en casos particulares. Pero el principio general del derecho engendra una apreciación jurídica de contenido más amplio tendiente a que toda persona que en razón de su actividad ejecute actos jurídicos lo haga motivado por una actitud honesta, leal, desprovista de cualquier intención dolosa o culpable, lo que jurídicamente implica la honradez de toda relación jurídica manifestada en su doble dirección: el ejercicio del derecho de buena fe o el cumplimiento de la prestación derivada de la obligación que la causa, lo que debe también ejecutarse de buena fe.

La parte final del artículo 83 agrega que la buena fe "se presumirá en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades". Este ordenamiento de contenido objetivo consagra a través de la norma jurídica una presunción constitucional desvirtuable por prueba fehaciente en contrario; ello quiere decir que la antigua presunción de buena fe contenida en el artículo 769 del C.C. y cuya aplicación en diversos contextos jurídicos fue motivo de controversia, por mandato constitucional hoy en día tiene aplicación en toda la actividad jurídica que se cumpla en la Nación.

El C.C. en el Capítulo I del Título VII, libro 2, artículo 768 sobre la posesión define la buena fe como la "conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio". Este concepto entendido frente al derecho público equivale a que la buena fe es la conciencia de actuar como particular o como servidor público por medios legítimos, exentos de fraude o de todo otro vicio.

Para la Corte Suprema de Justicia la "buena fe" ha de considerarse como "una realidad jurídica actuante y no simplemente como una intención de legalidad y una creencia de legitimidad, en forma que la cuestión predominante cuando se trate de apreciar la buena fe ha de consistir menos en hecho psicológico de creer que en la razón de la creencia, esto es, en el cómo y por qué se cree." (Cas. 2 de abril / 41).

Se trata, entonces, de una presunción de carácter constitucional aplicable a toda la actividad jurídica, aunque con el carácter de simplemente "legal", es decir, que en casos específicos los particulares o el Estado a través de sus agentes y en sus actividades propias puede actuar de mala fe contrariando el principio de la buena fe, lo cual puede ser demostrado ante la autoridad competente".

De la Coligación negocial

FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR - Coligación negocial / COLIGACION NEGOCIAL - Noción. Definición. Concepto / **SUPUESTOS DE COLIGACION NEGOCIAL -** Interdependencia de las relaciones / **INTERVENTORIA -** Noción. Definición. Concepto Estas obligaciones se atribuyen al interventor aun cuando consten en un contrato del cual no es parte, pues la doctrina en casos como el presente, bajo la denominación de coligación negocial ha explicado la interdependencia que entre dos contratos se establece, la cual puede ser voluntaria, cuando específicamente se ha hecho depender un contrato del otro por la común intención expresa de las partes, o funcional, cuando resulta de la unidad de la función perseguida, es decir, cuando las diferentes relaciones contractuales tienden a realizar un fin práctico único, de acuerdo con el significado objetivo de la operación social y económica. Los efectos que la coligación origina no obedecen a prescripciones legales específicas de los tipos contractuales, sino a la interpretación de la común intención de contratantes y de la función práctica del negocio. La interdependencia de las relaciones es, como su nombre lo indica, recíproca, en el sentido que la suerte de cada contrato está condicionada a la del otro; no obstante, existen supuestos de coligación en los cuales sólo la suerte de un contrato depende de la del otro o solo algunos aspectos específicos de un contrato dependen de los del otro,

mientras que el otro contrato u otros aspectos de ese contrato permanecen por fuera de tal dependencia. En tal sentido, la Sección Tercera ha caracterizado la interventoría como un contrato íntimamente relacionado en su objeto con el de obra respecto del cual ejerce su actividad el interventor, y como un contrato que a pesar de lo anterior, resulta independiente de éste en aspectos específicos como la prórroga y el incumplimiento, esto es, que la prórroga de la obra no implica de suyo la del interventor y que el incumplimiento del contrato de obra jamás significa por sí solo el incumplimiento del de interventoría. M.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, sección Tercera, Subsección B, Radicado 2500023260002000007321 (24266) 28 de febrero de 2013. **NOTA DE RELATORIA:** En relación con las facultades no permitidas al interventor consultar sentencia de 8 de marzo de 1996, exp. 8070. Sobre la distinción entre el contrato de obra y el de interventoría ver sentencia de 13 de septiembre de 1991, exp. 5127

Incumplimiento del contrato estatal, requisitos

INCUMPLIMIENTO - Aplicabilidad de la declaratoria de incumplimiento en contratos estatales / **EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO** – Contrato estatal. Aplicación La figura de la “excepción de contrato no cumplido” se encuentra prevista en el artículo 1609 del C. C., (...) Esta figura, en principio propia de los contratos de Derecho Privado, ha sido admitida en el campo de los contratos de Derecho Público, tal como lo evidencia el pronunciamiento de la Sección Tercera, recogido en la sentencia de 31 de enero de 1991, Exp. 4739, con un alcance limitado, por razón de la naturaleza misma de los contratos de Derecho Público y por el interés general que se encuentra envuelto en los mismos a cuya satisfacción se enderezan tales vínculos contractuales (...) la aplicación de la excepción de contrato no cumplido en los contratos del Estado se encuentra condicionada a los siguientes supuestos: i) La existencia de un contrato bilateral o sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas, lo cual implica que una de las partes se obliga a su prestación a cambio de la prestación que la otra parte le debe satisfacer, regla “do ut des” (te doy para que me des); ii) el no cumplimiento actual de obligaciones a cargo de una de las partes contratantes; iii) que el incumplimiento de la Administración sea grave, de entidad y gran significación, por manera que genere una razonable imposibilidad de cumplir por parte del contratista, iv) que ese incumplimiento pueda identificarse como fuente o causa del incumplimiento ante el cual se opone y que ha de justificarse por la configuración de aquel; v) el cumplimiento de sus demás obligaciones por parte de quien la invoca o, al menos

50

INTERVENTORÍA – Características La interventoría: i) será un mecanismo de vigilancia contingente en la medida que solo es obligatorio para el seguimiento de los contratos de obra adjudicados por licitación pública –art. 32, numeral 1–; en los demás casos se requerirá cuando «el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen» –art. 83, Ley 1474 de 2011–. ii) Este mecanismo de vigilancia exige, en su ejecución, la utilización de conocimientos especializados. iii) Por lo anterior, la entidad contrata un experto a través de un concurso de méritos, al tratarse la interventoría de una especie del contrato de consultoría –art. 32, numeral 2, inciso 2, Ley 80 de 1993 –, de manera que la interventoría es realizada por una «persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal» –art. 83, Ley 1474–. iv) Le es inherente el seguimiento técnico, frente a la vigilancia de la correcta ejecución del contrato vigilado; sin embargo, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que en el contrato de interventoría también se pacten

obligaciones para que el contratista realice el seguimiento administrativo, financiero, contable o jurídico. v) En caso de que no se encomiende al interventor el seguimiento total del contrato, en el contrato de interventoría «se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor» –art. 83, inciso 3–. Finalmente, vi) el contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad –art. 83, inciso 4–.

Así mismo al verificar el cumplimiento del objeto contractual y sus obligaciones la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain, incumplió con las siguientes cláusulas contractuales:

FUENTE	CLAUSULAS INCUMPLIDAS
Contrato de obra No. 2937-2017	<p>1.- Objeto del contrato: “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, las obras de la primera etapa del reforzamiento estructural y adecuaciones arquitectónicas de la Unidad Deportiva el Salitre de Bogotá D.C., Parque simón Bolívar -12-091, con cargo al proyecto 1082 construcción y adecuación de parques y equipamiento para todos”</p> <p>2.- Cláusula 2ª Obligaciones Contractuales: Serán obligaciones del contratista, las consagradas en el anexo denominado “CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: OBLIGACIONES EL CONTRATISTA</p> <p>6.4.2 Del pliego de condiciones definitivo; De la etapa de trámite de la licencia: El contratista realizará todos los trámites relacionados con la obtención de la licencia de construcción, para lo cual realizará la radicación, el seguimiento del trámite y la obtención de las observaciones de la Curaduría Urbana</p>
Contrato de obra 2937-2017	<p>5.- PLAZO DE EJECUCIÓN: “El plazo de ejecución se estima en trece (13) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía única y suscripción del acta de inicio. El plazo de ejecución se encuentra discriminado de la siguiente manera:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• <i>Período de Coordinación 15 días</i>• <i>Periodo de trámite de licencias: 2.5 meses</i>• <i>Periodo de construcción: 10 meses</i>
<i>Anexo Técnico; Condiciones para la ejecución del Contrato (Obligaciones del Contratista) Numeral No. 4 Item 1, Item 14</i>	<p><i>1.- Cumplir con el objeto del contrato en la forma y términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.</i></p> <p><i>14.- Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del Interventor, IDRD o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos</i></p>
<i>Carta de presentación de la Oferta</i>	<p><i>El contratista Declaró bajo la gravedad del juramento que se entendió prestado con la presentación de la propuesta que estaba dispuesta a cumplir a cabalidad con el objeto del contrato dentro del tiempo estipulado y en las condiciones y disposiciones de las normas contractuales para las Entidades Públicas.</i></p>
<i>Anexo Técnico; Condiciones para la ejecución del Contrato (Obligaciones del Contratista) Numeral No. 3.5 Plan de manejo de Inversión del Anticipo</i>	<p><i>En los contratos de obra, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo en una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera, para lo cual se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes reglas:</i></p> <p><i>1. El Anticipo únicamente deberá destinarse para el pago de los rubros aprobados en el plan de inversión de anticipo aprobado por el interventor y que sean necesarios para la ejecución de la obra, objeto del presente contrato.</i></p> <p><i>2. Cualquier giro o movimiento que se realice en la fiducia o patrimonio autónomo, deberá ser autorizado previamente por el INTERVENTOR.</i></p> <p><i>3. La fiducia o patrimonio autónomo deberá realizar los giros directamente a los proveedores después de la presentación ante la fiduciaria, por parte del CONTRATISTA de la factura correspondiente, elaborada por parte del proveedor, la cual debe estar debidamente</i></p>

	<p><i>aprobada por el INTERVENTOR. Las copias de los anteriores documentos aprobados por el INTERVENTOR deberán ser presentados por el CONTRATISTA en el informe del siguiente mes.</i></p> <p><i>4. Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo y entregado los recursos del anticipo, la misma será irrevocable, salvo autorización expresa y por escrito por parte del ordenador del gasto delegado por el IDRD.</i></p> <p><i>5. El término de la duración de la fiducia o encargo fiduciario será el necesario, para la amortización del anticipo, termino dentro del cual el CONTRATISTA deberá utilizar la totalidad de los recursos que reciba a título de anticipo.</i></p> <p><i>6. A la terminación del encargo fiduciario o del patrimonio autónomo la fiduciaria deberá devolver al IDRD los rendimientos que se hubieren generado de los recursos que integren el encargo, los cuales serán consignados en la cuenta que el IDRD le informe.</i></p> <p><i>7. En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendrán anticipo, excepto que en el documento constitutivo de la adición se establezca lo contrario.</i></p> <p><i>8. El costo de la comisión de la fiducia o patrimonio autónomo será cubierto directamente por el contratista y no podrá ser descontado de tos recursos entregados a título de anticipo.</i></p> <p><i>9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, la información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal, como también por el IDRD.</i></p> <p><i>10. Entiéndase como fideicomitente el CONTRATISTA, FIDUCIARIO la sociedad fiduciaria autorizada para funcionar como tal por</i></p>
--	--

	<p><i>la Superintendencia Financiera y el beneficiario el IDRD y los proveedores del CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato.</i></p> <p><i>11. En los demás aspectos relativos al manejo de la fiducia, se tendrá en cuenta lo establecido en el Libro Cuarto, Título XI del Código de Comercio, como también las demás que lo adicionen, modifiquen, sustituyan o complementen.</i></p> <p><i>La fiducia debe constituirse como cuenta separada específica para el contrato derivado del presente proceso.</i></p> <p><i>Se deberá elaborar un plan detallado de inversión del anticipo, previo al desembolso de los recursos, el cual debe contar con la aprobación de la Interventoría y hará parte integral del contrato de fiducia para el buen manejo y correcta inversión de los recursos que se reciban a título de anticipo.</i></p> <p><i>El anticipo debe ser invertido exclusivamente en la compra o el arriendo de equipos, compra de materiales, transporte de equipos o de materiales y pago de mano de obra no calificada del proyecto. El fin del anticipo es garantizar la adquisición de manera oportuna de insumos, materiales o equipos o elementos que requieran ser instalados o incorporados en el proyecto, así como la mano de obra no calificada del mismo.</i></p> <p><i>AMORTIZACIÓN: La amortización, entendida como la forma en que el contratista extingue la deuda contraída o con la entidad por el préstamo de los recursos públicos desembolsados a título de anticipo, se hará descontando de cada acta de pago el mismo porcentaje a aquel pactado por concepto de anticipo, hasta completar el monto total de este, (Los impuestos y retenciones que se causen por el desembolso del anticipo están a cargo del contratista).</i></p>
--	---

	<p><i>INVERSIÓN Y LEGALIZACIÓN:</i> Para los pagos que se hagan con los recursos del anticipo se deben contar con el visto bueno de la Interventoría presentando un oficio remisorio de autorización de pago dirigido a la fiduciaria, anexando los soportes contables requeridos para soportar el desembolso. Estos desembolsos deben corresponder al plan detallado de inversión del anticipo.</p> <p><i>El plazo máximo para la legalización del anticipo será a la firma del acta del recibo final del contrato. dicha legalización deberá estar acompañada del informe final del anticipo, el cuadro consolidad desembolsos respecto al plan de inversión vigente, el reporte de rendimientos financieros generados y los soportes de las respectivas devaluaciones al IDRD, igualmente deberá remitirse el cierre de la fiducia y la certificación de paz y salvo ante la fiducia.</i></p> <p><i>INFORME DE INVERSIÓN. DEBERÁN PRESENTARSE INFORMES MENSUALES DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO EL CUAL SERÁ PRESENTADO POR EL CONTRATISTA A MÁS TARDAR EL MES SIGUIENTE A LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS Y DEBERÁ CONTAR CON TODOS LOS SOPORTES REQUERIDOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ LEGALIZARSE EL ANTICIPO CON OFERTAS MERCANTILES NI DEMÁS TÍTULOS EJECUTIVOS PREVISTOS EN LA LEY MERCANTIL.</i></p> <p><i>El informe mensual es un documento detallado en el que se evidencia los desembolsos realizados en el mes objeto del informe, el cual debe venir acompañado del extracto de la fiducia y su respectiva conciliación bancaria, y cada uno de los giros realizados soportados con: la carta de autorización por parte del interventor, del soporte individual o comprobante de giro por</i></p>
--	---

	<p>parte de la fiducia y la factura o documento contable y sus anexos en caso de requerirse.</p> <p>Igualmente, se debe presentar el informe de los rendimientos financieros generados y los soportes que evidencian su devolución al IDRD: En este mismo informe deberá presentarse un consolidado de los desembolsos realizados desde la apertura de la fiducia hasta el mes objeto del informe y se muestre el estado respecto al plan de inversión de anticipo vigente mostrando acumulados por rubros y saldos. EN CASO DE REQUERIR RE-PROGRAMAR LA INVERSIÓN DE ANTICIPO, ESTA DEBE REMITIRSE A LA INTERVENTORÍA PARA QUE SEA APROBADA PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS</p>
<p>Numeral 4 – Forma de pago</p>	<p>(...)</p> <p>Costo trámites de obra:</p> <p>a) El noventa (90%) por ciento del valor del contrato en actas parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance de obra, previa certificación de cumplimiento del interventor y presentación de la factura, y en la cual se amortizará el porcentaje correspondiente al anticipo entregado.</p> <p>b) El diez (10%) por ciento restantes, previa suscripción del acta de liquidación y recibo a satisfacción por parte del Interventor y del Supervisor del IDRD.</p> <p>ANTICIPO DE OBRA: Se pagará un anticipo equivalente al 50% de los COSTOS DIRECTOS de los capítulos de obra de infraestructura, el cual será entregado al contratista previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato y una vez terminada la etapa de coordinación. El anticipo será girado por el IDRD a la entidad fiduciaria.</p>

	<p><i>El anticipo se amortizará en el porcentaje otorgado de las actas mensuales de ejecución de obra y en caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de liquidación.</i></p> <p><i>El anticipo es para ser invertido exclusivamente en la compra o el arriendo de equipos, compra de materiales, transporte de equipos o de materiales y pago de mano de obra no calificada del proyecto; con el fin de garantizar la adquisición de manera oportuna de insumos, materiales o equipos o elementos que requieran ser instalados o incorporados en el proyecto para su feliz término; por lo cual es necesario realizar el pago de un anticipo del 50% de los costos directos.</i></p> <p><i>Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.</i></p>
<p><i>Anexo Técnico – Obligaciones del Contratista numeral 20</i></p>	<p><i>Será obligación del contratista cumplir estrictamente con las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sus Decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2020. También deberá suministrar al interventor la información que este requiera al respecto.</i></p> <p><i>El contratista deberá cumplir con las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero.</i></p>

VI. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Solicitud del despacho en su auto del 24 de julio de 2023.

6.1 TASACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS AL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2937-2017 POR PARTE DE LA UNION TEMPORAL SAN ANTONIO REFORZAMIENTO ASEMAI Y LA FALTA SE GUIMIENTO Y VIGILANCIA POR PARTE DEL INTERVENTOS CONSORCIO SB

CONCEPTO	MONTO
Radicado 20224200268933 LA Subdirección Técnica de Construcciones informó que el valor del contrato de consultoría No. 2638 de 2021, cuyo objeto consistió en: “Realizar el estudio de patología estructural, el análisis de calidad y funcionalidad de las obras y presentar la propuesta de intervención para la puesta en funcionamiento de la Unidad Deportiva el Salitre (UDS) Cod IDRD 12-091 en Bogotá D.C.	Discriminado de la siguiente manera: Estudios y diseños: \$ 667.596.910 Gastos reembolsables: 69.729.504 Total contrato: \$ 737.326.414
Radicado 20224200268933 LA Subdirección Técnica de Construcciones informó que el valor del contrato de interventoría 2722 de 2021, cuyo objeto consistió: “Realizar la interventoría Técnica, Administrativa, contable, financiera y Jurídica al Contrato derivado del proceso de selección por el concurso de méritos y cuyo objeto fue “Realizar el estudio de patología estructural, el análisis de calidad y funcionalidad de las obras y presentar la propuesta de intervención para la puesta en funcionamiento de la Unidad Deportiva el Salitre (UDS) Cod IDRD 12-091 en Bogotá D.C.	\$259.046.367
TOTAL PERJUICIOS (TASADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA)	\$996.374.289

Nota: Los valores antes transcritos corresponden a los radicados 20228000206853 y 20224200268933 y a lo que figura en los estudios previos y pliego de condiciones definitivo.

En cumplimiento del artículo 157 del CPACA, se estima de manera razonada y aproximada que la cuantía de las pretensiones corresponde a la suma de, **NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$996.374.289)**, que corresponde a los perjuicios hasta ahora demostrados y ocasionados por la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain y la Interventoría SB por las razones expuestas en esta

demanda; sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar y otros perjuicios que se llegaren a probar en transcurso del proceso.

La estimación razonada de la cuantía es consecuencia de la declaratoria de incumplimiento parcial del contrato 2937 de 2017, declarada en las Resoluciones 1452 del 27 de octubre de 2022 que declaró el incumplimiento parcial del contrato, la 1825 del 22 de diciembre de 2022 que resolvió el Recurso de Reposición contra la Resolución 1452 y la 1858 del 28 de diciembre de 2022.

La entidad a raíz del incumplimiento y el tiempo transcurrido desde la fecha de terminación del contrato (5 de marzo de 2020) y, en razón a las condiciones en que se recibieron las obras realizadas por la Unión Temporal San Antonio IDR Reforzamiento Asemain, tuvo la necesidad de realizar a través de un concurso de Méritos el proceso de selección abierto IDR-SG-CM-031-2021, en SECOP II, con el objeto de “REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, EL ANÁLISIS DE CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS Y PRESENTAR LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS) COD IDR 12-091 EN BOGOTÁ D.C”.

El alcance del objeto comprendía: realizar y entregar los estudios de Patología estructural, análisis de calidad y funcionalidad de las obras existentes; y en función del resultado y con base en la propuesta de intervención entregar los estudios, diseños en las condiciones a que hubiera lugar, trámites, permisos, autorizaciones y productos técnicos que se requieran como propuesta de intervención, para que el IDR pudiera llevar a cabo las intervenciones y obras de la infraestructura para la puesta en funcionamiento del bien inmueble público denominado UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS), identificado con Código IDR 12-091 ubicado en la ciudad de BOGOTÁ D.C.

El contratista debía realizar el Estudio de Patología Estructural el cual describiera el estado actual de las obras existentes, frente al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 o vigente, para poder determinar daños y patologías en la edificación, y así, entregara un diagnóstico y determinara la viabilidad de la culminación de las obras conforme a los estudios y diseños con los que la entidad cuenta.

Adicional a esto, el contratista también le correspondió realizar el análisis de calidad de las obras construidas de acuerdo con la calidad de los materiales utilizados y sus procesos constructivos llevados a cabo. Así mismo, realizar el análisis de funcionalidad el cual refleje la resistencia y capacidad de funcionamiento requeridos, según el uso y edad, de la edificación frente al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 o vigente y demás normatividad técnica aplicable.

El valor total del contrato fue estipulado en la suma de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS (\$737.350.076,00) M/Cte, incluidos todos impuestos del orden Nacional y Distrital, así como los costos directos e indirectos que conlleve su ejecución.

El contrato sería financiado con recursos de la vigencia fiscal «2021» y contó con la siguiente clasificación del gasto.

CLASIFICACIÓN DEL GASTO – FUENTE DE FINANCIACIÓN						
CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	PROGRAMACIÓN PMR PRODUCTOS	CONCEPTO DE GASTOS	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE HACIENDA	FUENTE IDRD	VALOR
3311602327856 construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	1 parques y Escenarios Deportivos. Rubros 7856	1082001042 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1-100-F039 VACREDITO	1-100-F039 VACREDITO	1-100-F039 VACREDITO	\$ 737.350.076,00
TOTAL \$735.350.076.00						

El presupuesto para el proceso se calculó teniendo en cuenta las condiciones técnicas y estado actual del inmueble, así como, considerando los tiempos de ejecución, los profesionales mínimos requeridos para realizar la Consultoría objeto del presente proceso de selección, cada uno con su respetiva formación y experiencia, así como las dedicaciones mínimas para la propuesta de intervención de los estudios y diseños; igualmente se prevén gastos administrativos para la ejecución de dicha Consultoría, tales como comunicaciones e informática, elaboración de informes, reproducción de documentos, planos, equipos de oficina, licencias de programas computacionales especiales, etc.; así mismo se tiene en cuenta el cálculo de ensayos de laboratorio de contra muestras o verificaciones que se requieran en la ejecución de los estudios y diseños, utilización de equipos especiales como planta portátil, alquiler de computadores, equipos de topografía etc., oficina central, pólizas e impuestos y demás gastos administrativos que se prevén e incurre el contratista durante la ejecución del contrato, al igual que los imprevistos y utilidad a reconocer por el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.

En atención a lo antes señalado el IDRD, una vez adjudicado el contrato a la compañía CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S, identificado con NIT No. 900.171.000-8, representada legalmente por el señor EDUARD LEONARDO RODRÍGUEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.740.197, por valor de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$737.326.414), el IDRD celebró el **contrato de consultoría 2638 de 2021 el 11 de octubre de 2021, el cual inició el 11 de enero de 2022.**(Lo resaltado es nuestro)

Dicho contrato se celebró por un plazo de nueve meses (9) quince (15) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Como es el deber ser, y, con el fin de verificar los trabajos que realizaría el contratista consultar, el IDRD, abrió el concurso de méritos Abierto No. IDRD-SG-CM-033-2021, que tuvo por objeto lo siguiente: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, EL ANÁLISIS DE CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS Y PRESENTAR LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS) COD IDRD 12-091 EN BOGOTÁ D.C.

El presupuesto oficial para esta contratación incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos corresponde a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 259.047.875).

CLASIFICACIÓN DEL GASTO - FUENTE DE FINANCIACIÓN							
CD P	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	PROGRAMA CIÓ NPMR PRODUCTOS	CONCEPTO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	FUENTE HACIENDA	FUENTE IDRD	VALOR
3583	3311602327856 construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	1 parques y Escenarios Deportivos. Rubros 7856	1 parques y Escenarios Deportivos. Rubros 7856	1-100-F039 VACREDITO	1-100-F039 VACREDITO	1-100-F039 VACREDITO	\$ 259.047.8750
TOTAL \$ 259.047.875							

En atención a lo antes señalado y superada la etapa precontractual, el IDRD, adjudico el contrato a la compañía CONSORCIO INTERVENTORÍA UDS 2021, Nit. 901.545.345-3, representado legalmente por el señor ABELARDO DUARTE LOZANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.838.012 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$259.046.367), incluidos todos impuestos del orden Nacional y Distrital, así como los costos directos e indirectos que conlleve su ejecución, teniendo en cuenta que cumplió con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, financieros y su propuesta económica es consistente con el presupuesto del proceso, **celebró el contrato de interventoría No. 2722 de 2021**, cuyo objeto consistió: “Realizar la interventoría Técnica, Administrativa, contable, financiera y Jurídica al Contrato derivado del proceso de selección por el concurso de méritos y cuyo objeto fue “Realizar el estudio de patología estructural, el análisis de calidad y funcionalidad de las obras y presentar la propuesta de intervención para la puesta en funcionamiento de la Unidad Deportiva el Salitre (UDS) Cod IDRD 12-091 en Bogotá D.C.

El pazo de ejecución del contrato se pactó en diez (10) meses y quince (15) días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y suscripción del acta de

inicio. **El acta de inicio se suscribió a partir del 31 de diciembre de 2022.** (Lo resaltado es nuestro)

VII. PRUEBAS

1.- Documentales que se aportaron con el escrito de presentación de la demanda del Contrato de obra pública Unión Temporal San Antonio IDR Reforzamiento Asemain No. 2937 de 2017:

Se aporta el expediente administrativo del contrato 2937-2017 de la siguiente manera:

1.1 Memorias 1 de 2 contiene setenta y tres (73) carpetas

1.2 Memorias 2 de 2 contiene una (1) carpeta No.39

1.3 Referencia para consultar Detalle del Proceso Número: IDR-STD-LP-017-2017 en la plataforma Secop I así: 17-1-144445 lo anterior en cumplimiento del artículo 216 del CPACA Y Ley 2213 que establece la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174445>

Contrato de interventoría Consorcio SB 2999 de 2017

Se aporta el expediente administrativo del contrato 2999-2017 de la siguiente manera:

2.1. Memoria 1 de 1 que contiene 63 carpetas del contrato 2999-2017

2.2 Referencia para consultar Detalle del Proceso Número: IDR-STD-CM-008-2017 en la plataforma Secop I así: 17-15-6649659 lo anterior en cumplimiento del artículo 216 del CPACA Y Ley 2213 que establece la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020.

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6649659>

3.- Documentales que se aportaron con el escrito de subsanación de la demanda del día 27 de abril de 2023:

3.1 Contrato de patología No. 2638 de 2021

Se aporta el link de Secop I para que el contrato mencionado pueda ser consultado por el Despacho.

Lo anterior con fundamento en el artículo 216 del CPACA, el cual indica que será admisible la utilización de medios electrónicos para efectos probatorios, de conformidad con lo dispuesto en las normas que regulan la materia y en concordancia con las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 y las normas del Código de Procedimiento Civil (art. 247 C.G.P.)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12193875&q-recaptcha-response=03AGdBq27ct904Ij5OxaRsOeRTP1SuRIPHQW4CcSJKdvPG-FrW-O92z4mjnc0IWwt1RVGaANmCDYfIGd7zN6LE_ryhjbzYsnZcdTy0AM8QSMsAOvUg_-ymoe1mT6kLaJ2AIYTUGsoDiVcRD1M5xHpU-

[BEzpKhS422p7DCkJsK_0NA9rElySC4wQr1opyrprU-v1SEHnmYhshteSXjl9pSbfOv7vhcePHhXLtnyLFqUW8iWGWVkj3Dw_jLQzUrxQqgXAMntn9YkEAPUT0wlkAJzfjhDMxmH0VY3dFITxjFfl10MhQVwSqXdSPfhG7-q-ARh2A-IOLrvB9WtC3vfbUkvmvsce7VGa2bPe3DXPK9p5z_ZRym6mJI_UL1_hBzGnhNp-BFFEcuKW3vosaAResdVDGAb1PTddmOAAEE35q2jWY_A-Rci8dy2DdzmdiYuS_1NPITYxqQAxcUpqWwQTzRdrYqo5kCQIHeJWg](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12211559&q-recaptcha-response=03AGdBQ27iJMtLJpJIESStDxm9_e5MoG0zdTqSb1YugZeuQMyw7ACr2xpzGgPzzZGRU96KYSro781H-Zjwsx8wbrVvSkHBMVaa9PMofrtNGKEI5OKuHEX0GcYI6t2CrrngbzLi0qs2rdoKOCUbhhMEAxtZKu4GzYEJR2T0x8y4qAlsVES5EIJZntDnIVJvAoZml1qXje2vZtjaV6ujQ_TebUEGC50RmCi72mL5F0ojZChNAPwXqcan8ZjH4JrjGeDNWDKMGGIKCRkoHO2BPynjvacDIhddB8XSI5chio1J64X9fqd2HHLmfd_fGPnf3Lc9Cn1Pjh8LmywnqQJbZyUDOrHL4bk8R3SEft5fszpy8QlzESPUeqR2Ry28NLzq1_VLcbZyAl_gnMw_A0zdQmROsir-148dXJsQnFIBP-JBeENaq5wK0nrj5ykySFupqXKs53MPhpiwm3wHEO6hvjnzq9HcbMnJDTYA)

3.2 Documentales que se aportan del contrato de Interventoría a la patología No. 2722 de 2021

Se aporta el enlace de Secop I para que el contrato mencionado pueda ser consultado por el Despacho.

Lo anterior con fundamento en el artículo 216 del CPACA, el cual indica que será admisible la utilización de medios electrónicos para efectos probatorios, de conformidad con lo dispuesto en las normas que regulan la materia y en concordancia con las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 y las normas del Código de Procedimiento Civil (art. 247 C.G.P.)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12211559&q-recaptcha-response=03AGdBQ27iJMtLJpJIESStDxm9_e5MoG0zdTqSb1YugZeuQMyw7ACr2xpzGgPzzZGRU96KYSro781H-Zjwsx8wbrVvSkHBMVaa9PMofrtNGKEI5OKuHEX0GcYI6t2CrrngbzLi0qs2rdoKOCUbhhMEAxtZKu4GzYEJR2T0x8y4qAlsVES5EIJZntDnIVJvAoZml1qXje2vZtjaV6ujQ_TebUEGC50RmCi72mL5F0ojZChNAPwXqcan8ZjH4JrjGeDNWDKMGGIKCRkoHO2BPynjvacDIhddB8XSI5chio1J64X9fqd2HHLmfd_fGPnf3Lc9Cn1Pjh8LmywnqQJbZyUDOrHL4bk8R3SEft5fszpy8QlzESPUeqR2Ry28NLzq1_VLcbZyAl_gnMw_A0zdQmROsir-148dXJsQnFIBP-JBeENaq5wK0nrj5ykySFupqXKs53MPhpiwm3wHEO6hvjnzq9HcbMnJDTYA

63

4.- Documentales que se aportaron con la subsanación de la demanda el pasado 27 de abril de 2023

1. Acta de constitución de la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain.
2. Antecedentes que dan cuenta de la fecha de terminación del contrato 2937-2017, tal y como se relaciona a continuación:
 - a. Se adjunta informe de Interventoría del Consorcio Santa Paula 008 en donde consta la fecha de terminación.
 - b. Acta de posesión del inmueble realizada por el IDRD a la Unidad Deportiva el Salitre.
3. Resoluciones 1452 del 27 de octubre de 2022, 1825 del 22 de diciembre de 2022 y 1858 del 28 de diciembre de 2022, las cuales se dictaron con ocasión del Proceso Administrativo Sancionatorio adelantado por el IDRD en contra de la Unión

Temporal San Antonio IDR Reforzamiento Asemain.

4. Certificados expedidos por la Tesorería del IDR que certifica que Seguros la Equidad realizó el día 31 de marzo de 2023 un pago por la suma de **\$2.161.240.388,00** con cargo a la póliza AA027962 y el día 28 de abril realizó un segundo pago por la suma de **\$2.161.240.388,00**, para un pagado total de; Cuatro Mil Trescientos Veintidós Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos M/cte (**\$4.322.480.776,00**).

5.- Documentales que se aportan con este escrito de subsanación de la demanda, de conformidad a lo solicitado por el Despacho mediante auto del 24 de julio de 2023

- a. Documento aportado por el Consorcio Santa Paula 008, que se refiere a: “Documento aclaratorio al informe final, fechado 4 de mayo de 2023, en donde el Consorcio corrobora que el contrato 2937 de 2017 terminó el día 5 de marzo de 2020 y que y que el IDR tomó posesión del inmueble el día 6 de marzo de 2020.

A folios 10 al 15 del informe aparecen los correos enviados a la Unión Temporal San Antonio Reforzamiento Asemain, para que firmara el acta de reinicio, sin respuesta alguna por lo cual llegada la fecha de terminación de la obra el 5 de marzo de 2020 se da por terminado el contrato.

- b. Acta Final del Contrato de interventoría 2999-2017, en donde se verifica que el contrato terminó el día 20 de abril de 2020.
- c. Autorización de cesión del contrato 2999-2017 del Consorcio SB (cedente) al Consorcio Santa Paula 008 (cesionario) fechado 20 de septiembre de 2019.
- d. Copia simple del contrato 2937-2017 debidamente suscrito por las partes intervinientes.
- e. Copia simple del contrato 2999-2017 debidamente suscrito por las partes que en el intervinieron
- f. Se aportan certificados de Cámara y Comercio de cada una de las empresas que integran tanto la Unión Temporal San Antonio IDR Reforzamiento Asemain y del Consorcio SB.

64

Interrogatorios de parte que se solicitan:

1.- Solicito al señor Magistrado, llamar a rendir interrogatorio de parte a las siguientes personas: RAFAÉL PALACIO DORADO, identificado con la cédula de ciudadanía número, 94.459.578, en calidad de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORSZAMIENTO ASEMAIN, o quien haga sus veces, con el fin que se pronuncie sobre los hechos de la demanda en especial en lo que tiene que ver las circunstancias de tiempo modo y lugar que se generó el presunto incumplimiento del contrato de obra 2937 -2017, respecto a la manera en que se invirtió el anticipo y las razones por las cuales no legalizo la suma de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$2.794.593.945.00) M/cte. Igualmente determinar cuáles fueron las razones por la cuales la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORSZAMIENTO ASEMAIN, no pudo cumplir con el objeto contractual como con las obligaciones contraídas en el contrato 2937-2017, informe la relación legal o contractual que la Unión Temporal tiene o tuvo con la empresa TRANINGCO S.A.S. y la empresa,

GRANDES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A.S., los cuales fungieron como proveedores y que presuntamente funcionaban en las mismas instalaciones de la Unión Temporal San Antonio IDR Reforzamiento Asemain. Así como sobre las demás circunstancias que rodearon el desarrollo del objeto contractual, entre otros como el que tienen que ver con el trámite de la licencia de construcción ante la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá, el señor **Rafael Palacio**, puede ser notificado en la siguiente dirección. Carrera 14 A # 119 -83 oficina 301 o en la calle 93 No.17-57 oficina 303 de Bogotá D.C., o en los siguientes correos electrónicos: asistente@asecaf.com.co contacto@asecaf.com.co, o reforzamiento-uds@asecaf.com.co ó en el lugar que se indique en el momento de la diligencia, o a través del apoderado judicial que la Unión Temporal nombre para la defensa de sus intereses.

2.- Solicito igualmente al) señor Magistrado, llamar a rendir interrogatorio de parte a las siguientes personas: Al Representante Legal del CONSORCIO SB, identificado con el Nit. 901.119.650-9, representado legalmente por el señor, FABIAN ANDRÉS VALLEJO PACHÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.088.797 de Bogotá, el cual está integrado por: CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S., sociedad identificada con el Nit. 860.451.253-1 representada legalmente por el señor, STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.199.850 de Bogotá, con el 60% de la participación dentro del consorcio; por la firma, VALLEJO H. INGENIEROS CONSULTORES -CONSTRUCTORES S.A.S., identificado con Nit.900.416.314-9, representada legalmente por el señor FABIAN ANDRÉS VALLEJO PACHON , identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.088.797, con el 40% de participación dentro del consorcio, para que se pronuncie sobre los hechos de la demanda, en especial entre otros, para que indiquen al Despacho las razones de tiempo, modo y lugar que le permitieron autorizar el cobro de las Actas Parciales de obra, de la 1 a la 10, cual fue el criterio técnico, contable y financiero que se siguió para el pago de proveedores de la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN, a TRANINGCO S.A.S., CRUZ FERRETERIAS S.A.S., ESMECOL S.A.S., INVERSIONES GRANDES PROYECTOS S.A.S, TORNIRAP – TECNIFORMAS LTDA., y otros proveedores, cuáles fueron las justificaciones para los respectivos giros, cual fue el control de auditoría, administrativa, contable y financiero que se le hizo a la inversión del anticipo, que controles se aplicaron y siguieron para que el contratista cumpliera en tiempo con el objeto contractual del contrato 2937-2017 y el cumplimiento de sus obligaciones, así como la auditoria que se le hizo para el pago de los proveedores y demás circunstancias en desarrollo de su objeto contractual establecido en el contrato de interventoría 2999-2017, los citados pueden ser notificados en la siguiente dirección: Transversal 24 No. 59-07 de Bogotá y/o carrera 76 No.45 C-82 de Medellín (Antioquia) respectivamente, o al correos electrónicos: vallejohingenieros@gmail.com o gerencia@vallejoh.com o en el lugar que se indique en el momento de la diligencia o a través de su apoderado judicial que lo represente en este proceso.

65

Testimoniales que se solicitan

1.- Solicito igualmente al señor Magistrado, llamar a rendir testimonio al Representante Legal del CONSORCIO SANTA PAULA 008, cesionario del contrato de interventoría 2999-2017, representada legalmente por el señor, RAÚL ORLANDO DELGADO CAVIATIVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.573.492 de Bogotá, El cual está integrado por las siguientes sociedades: SOLUCIÓN INGENIERIA S.A.S., identificada con el Nit.

901.114.547-5, representada legalmente por el señor, RAÚL ORLANDO DELGADO CAVIATIVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.573.492 de Bogotá, con una participación dentro del consorcio del 50%, e INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. – ICOPLAN S.A., identificado con el Nit. 800.097.991-2, representada legalmente por el señor, SANTIAGO PÁEZ TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.339.188 de Bogotá, con el 50% de participación en el consorcio, para que se pronuncie sobre los hechos de la demanda, en especial entre otros, para que indique al Despacho las razones de tiempo, modo y lugar que le permitieron autorizar el cobro de las Actas Parciales de obra, de la 11 y 12, cual fue el criterio técnico, contable y financiero que se siguió para el pago de proveedores de la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN, a TRANINGCO S.A.S., CRUZ FERRETERIAS S.A.S., ESMECOL S.A.S., INVERSIONES GRANDES PROYECTOS S.A.S, TORNIRAP – TECNIFORMAS LTDA., y otros proveedores, cuáles fueron las justificaciones para los respectivos giros, cual fue el control de auditoría, administrativa, contable y financiero que se le realizó a la inversión del anticipo, que controles se aplicaron y siguieron para que el contratista cumpliera en tiempo con el objeto contractual del contrato 2937-2017 y el cumplimiento de sus obligaciones, así como la auditoria que se le hizo para el pago de los proveedores y demás circunstancias en desarrollo de su objeto contractual establecido en el contrato de interventoría 2999-2017 e indique al Despacho cuales fueron las alarmas o hechos que le permitieron solicitar la INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDR se iniciara el proceso administrativo indicado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 entre otros, el citado puede ser notificado en la Carrera 70C #48-55 de Bogotá o en los siguientes correos electrónicos: proyectos@soliusas.com o civil.delgado@hotmail.com, o en el lugar que se indique en el momento de la diligencia.

66

2.- Solicito igualmente al señor Magistrado, llamar a rendir testimonio a la señora MÓNICA LILIANA MENDEZ TRIVIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 512.377.137, quien para el momento de la ejecución del contrato fungía en calidad de supervisora del contrato de interventoría 2937-2017 y al parecer del contrato 2999-2017, E INGRID YURANI ROPERO TRIVIÑO, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 52.969.921, quien para la época de los hechos se desempeñaba como apoyo a la supervisión; para que se pronuncien sobre los hechos que le consten de la demanda, en especial las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el incumplimiento de las obligaciones de los contratos, indique al Despacho, si la Unión Temporal San Antonio Reforzamiento IDR dio cabal cumplimiento al valor del anticipo pactado en el contrato, que medidas se tomaron cuando se hicieron evidentes los incumplimientos del contratista, así como los demás hechos que le consten referente al asunto que nos convoca. Las testigos pueden ser notificadas en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, en la Subdirección Técnica de Construcciones, ubicado en la calle 63 No. 59 A- 06 de Bogotá D.C., o a través del apoderado judicial del IDR.

3.- Solicito igualmente al señor Magistrado, llamar a rendir interrogatorio de parte al señor MAURIO REINA MANOSALVA REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 50.503.059, quien para el momento en que se adjudicó el contrato y parte de su ejecución, fungía como Director Técnico de Construcciones del IDR, con el objeto que se pronuncie sobre los hechos de la demanda e indique al Despacho que actuaciones y actividades se ejercieron sobre la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN, con el fin que el contratista cumpliera con el objeto contractual y las obligaciones pactadas en el contrato 2937-2017, así como para evitar que el contratista incurriera en incumplimiento del contrato, los controles que se ejercieron para verificar la

correcta inversión del anticipo, indique al Despacho cuales fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen al presunto incumplimiento por la no terminación del contrato de obra contrata, y que acciones se tomaron por parte de la Subdirección Técnica de Construcciones, con el fin de determinar si estas fueron pertinente y eficaces para atender las eventuales demoras presentadas en la ejecución de la obra, entre otros hechos, el citado puede ser notificado en las siguientes direcciones: Calle 31 #13 A-51 Torre 2 oficina 330, edificio Panorama, de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico maoreyna@yahoo.es o en el lugar que se indique en el momento de la diligencia.

Solicitud de Prueba por informe artículo 275 Ley 1564 de 2012

De manera respetuosa le solicito al señor magistrado decretar y ordenar la prueba por informe de conformidad con el artículo 275 del CGP, para que la firma: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S., representada legalmente por el señor, NELSON FERNANDO RODRÍGUEZ VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.139.624, para que allegue a su Despacho el estudio de patología el cual fue contratado por el instituto distrital de recreación y deporte – IDRD mediante contrato 2638-2021 cuyo objeto consistió en: “REALIZAR EL ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, EL ANÁLISIS DE CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS Y PRESENTAR LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS) COD IDRD 12-091 EN BOGOTÁ D.C, con el fin que el Representante Legal de la empresa o quien el delegue desde su experticia técnica, ilustre sobre los aspectos técnicos tales como lesiones que ha sufrido la Unidad Deportiva el Salitre por la no terminación del contrato 2937-2017 objeto de esta demanda, entre ellas: lesiones mecánicas, químicas, biológicos, físicas sufridas por el tiempo de exposición a la intemperie y demás factores climáticos que hayan producido el deterioro de los materiales, también para que informe al Despacho las condiciones de funcionalidad, durabilidad e integridad de la construcción, el método empleado para llegar a tales conclusiones entre otros aspectos, la empresa puede ser notificada en la Calle 93 B No. 17-42 Oficina 502 de Bogotá o en los e-mails: cyclicita@gmail.com o admin@cycciviles.com

67

VIII. COMPETENCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección Tercera, es competente para conocer de la presente demanda, en primera instancia, con base en lo dispuesto en el artículo 152 numeral 4, el cual fue modificado por la Ley 2820 de 2021 y demás normas concordantes que lo modifiquen o adiciones del CPACA, teniendo en cuenta la naturaleza de la demanda, controversias contractuales y por exceder la cuantía de los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

IX. ANEXOS

1. Poder otorgado por el doctor, **NELSON ANDRÉS MEJIA NARVAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.957.306 de Bogotá, obrando en calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, Establecimiento Público del Orden Distrital, nombrado mediante Resolución No. 689 del 7 de septiembre

de 2021, posesionado según Acta No. 3907 del 8 de septiembre del mismo año, en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución No.735 del 21 de noviembre de 2012 proferida por la Dirección General de la entidad, por medio de la cual se delegó la representación judicial y extrajudicial del IDRD. Documentos que se encuentran aportados con la presentación de la demanda.

En tal sentido le solicito al señor Magistrado reconocerme personería en los términos y condiciones del poder otorgado.

X. NOTIFICACIONES

Con la subsanación de la demanda se aportan todas las direcciones que reposan en el IDRD de las partes demandadas:

1.- UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, con Nit. 901.118.265-1, la cual puede ser notificada en las siguiente dirección, la cual consta en el documento de constitución de la Unión Temporal; Carrera 14 A # 119- 83 Oficina 301 Bogotá o en los siguientes correos: asistente@asecaf.com.co, contacto@asecaf.com.co, reforzamiento-uds@asecaf.com.co, administrativa@construccionesmaja.com.co, incoesas@yahoo.com, contacto@asecaf.com.co, arquitecto@asecaf.com.co, asis.licitaciones@construccionesmaja.com.co, juan.quintero@mdlegal.com.co, licitaciones@asecaf.com.co

Se aportan los certificados de Cámara y Comercio de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain

68

La Unión Temporal esta integrada por:

INCOE -INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS, con Nit.900.803.956-7, con el 24%, está representada legalmente por el señor, William Javier Vanegas Barros, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.121.333.761, puede ser notificado en la siguiente dirección, Blaz de Lezo Mz 23 Lt 18 Etapa 4, Cartagena – Bolívar- Colombia, o en el correo de notificaciones: incoesas@yahoo.com

ASECAF SAS, con Nit.808.000.935-2 con el 25%, está representada legalmente por el señor, Rafael Palacio Dorado, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.459.578, puede ser notificado en la calle 93 No. 17-57 Oficina 303 de Bogotá D.C., o al correo electrónico: asistente@asecaf.com.co

CONSTRUCCIONES MAJA S.A.S Nit.800.112.612-0 con el 51%, representada Legalmente, de acuerdo con el certificado de Cámara y Comercio, por el señor Abelardo Ramírez Varela, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.877.114, en la siguiente dirección: Carrera 85 No. 14-112 edificio Goya – Cali – Valle, o en el correo electrónico: direccion.administrativa@construccionesmaja.com.co

Se aportan los certificados de Cámara y Comercio de cada una de las empresas que integran el CONSORCIO SB.

CONSORCIO SB, cedente identificado con el Nit. 901.119.650-9, representado legalmente por Fabian Andrés Vallejo Pachón, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.088.797 DE Bogotá, el cual está integrado por:

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S., sociedad identificada con el Nit. 860.451.253-1 representada legalmente por el señor, Stephan Iván Vallejo Pachón, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.199.850, con el 60% de la participación, puede ser notificado en la transversal 24 No. 59-07, Bogotá o al correo electrónico: ccivinging@gmail.com

VALLEJO H. INGENIEROS CONSULTORES -CONSTRUCTORES S.A.S., identificado con Nit.900.416.314-9, representada legalmente por el señor, Fabian Andrés Vallejo Pachón, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.088.797 con el 40% de participación dentro del consorcio, el cual puede ser notificado en las siguientes dirección, carrera 76 a No. 45 C-82, Medellín – Antioquia -Colombia, o en el correo electrónico: vallejohingenieros@gmail.com o gerencia@vallejoh.com y/o ccivinging@gmail.com .

EI INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, y su apoderado judicial, GERMÁN ORJUELA JARAMILLO, pueden ser notificados en la Calle 63 No. 59 A-06, Oficina Asesora Jurídica de Bogotá D.C. o en el siguiente correo electrónico: notificaciones.judiciales@idrd.gov.co o german.orjuela@idrd.gov.co

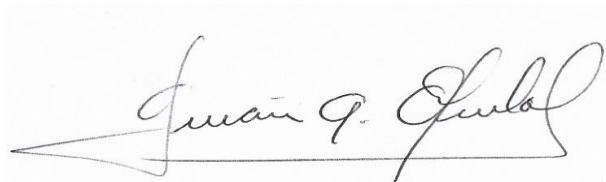
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado:

Recibirá notificaciones en la carrera 7 No. 76-66 piso 2 y 3 de la ciudad de Bogotá o en el mail: agencia@defensajuridica.gov.co

Parte demandante:

EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD, puede ser notificado en la Calle 63 No. 59 A-06 a través de la Oficina Asesora Jurídica por intermedio de su apoderado GERMÁN ALFONSO ORJUELA JARAMILLO, en la dirección antes indicada o en el correo electrónico: notificaciones.judiciales@idrd.gov.co

Cordialmente,



GERMÁN ALFONSO ORJUELA JARAMILLO
C.C.79.232.917 de Bogotá
T.P. 96.334 del C.S. de la J.